



///nos Aires, 21 de setiembre de 2012.

AUTOS Y VISTOS:

Para resolver en la presente causa N° 2497/11 caratulada:
"ESTADO NACIONAL y otros s/amparo", del registro de esta
Secretaría N° 5;

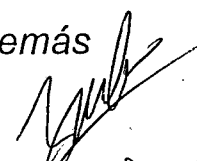
Y CONSIDERANDO:

1º) Que, a fs. 1 ter/50, Virginia DEL ÁGUILA, en el carácter
de apoderada de la ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA
COMPENTENÇIA, interpuso demanda contra las siguientes personas
jurídicas:

- a) Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía de la Nación;
- b) TELEFÓNICA S.A.;
- c) ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.;
- d) SINTONÍA S.A.;
- e) SINTONÍA S.P.A.;
- f) INTESA SAN PAOLO S.P.A.;
- g) MEDIOBANCA S.P.A.;
- h) TELECOM ITALIA S.P.A.;
- i) TELECOM ITALIA INTERNACIONAL N.V.; y
- j) PIRELLI & C, S.P.A.

Se indicó que el objetivo de la demanda interpuesta es la
revocación y la declaración de la ilegalidad y/o nulidad (con costas si
hay oposición) de la Resolución de la Secretaría de Política
Económica N° 148 del 13 de octubre de 2010, la cual fue dictada en el
marco del Expediente N° S01: 00114652/2009 del Ministerio de
Economía.

Se aclaró que la demanda se dirige contra lo dispuesto por
el art. 5 de aquella resolución N° 148, en cuando por aquel artículo se
acepta "...el compromiso ofrecido por las firmas notificantes y demás


CECILIA ROCCA


RAFAEL CAPUTO
JUEZ


SANDRA VIVIANA GONI
SECRETARIA

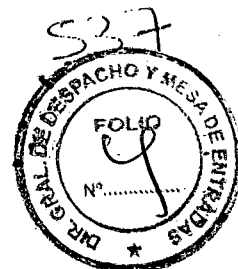
compañías involucradas y subordina la autorización de la operación de concentración económica investigada, en los términos del Art. 13 inciso b) de la Ley 25.156, al cumplimiento irrevocable y efectivo del compromiso ofrecido con las aclaraciones y precisiones efectuadas en el Título XIV del Dictamen CNDC N° 835/10..."

Se alegó que el sustento del planteo de nulidad e ilegalidad se funda en que, por la resolución N° 148/10, se violaron los arts. 7 y 13 de la ley 25.156 y se convalidó la monopolización de la industria de las telecomunicaciones en Argentina, con la consecuente afectación de la libre competencia y el interés económico general.

Se solicitó, asimismo, que se prohíba la operación de concentración económica notificada y/o se subordine a la desinversión por parte de TELECOM ITALIA S.P.A y TELECOM ITALIA INTERNATIONAL N.V., de todas las acciones que detentan, directa o indirectamente, en SOFORA TELECOMUNICACIONES S.A., NORTEL INVERSORA S.A., TELECOM ARGENTINA S.A. y TELECOM PERSONAL S.A.

En subsidio de la solicitud detallada por el párrafo anterior, se solicito que *"...se revoque la resolución impugnada y se ordene a la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 25.126 que dicte una nueva resolución que remedie la afectación al régimen de libre competencia que le causa la Resolución impugnada..."*

2º) Que, por la presentación recordada por el considerando anterior, se explicó que la Resolución N° 148/10 fue emitida en los términos del art. 13 de la Ley 25.156, por el cual se establece que *"...En todos los casos sometidos a la notificación prevista en este capítulo, el Tribunal por resolución fundada, deberá decidir dentro de los cuarenta y cinco (45) días de presentada la solicitud y documentación respectiva: a) Autorizar la operación; b) Subordinar el acto al cumplimiento de las condiciones que el mismo Tribunal establezca; c) Denegar la autorización..."*. Se agregó que, por aquella resolución, se subordinó la autorización de una operación de concentración económica al cumplimiento de un compromiso.



3º) Que, la presentante mencionada por el considerando 1º de la presente indicó que TELEFÓNICA S.A. y ciertos socios financieros tomaron, en forma indirecta y conjunta, el control económico sobre TELECOM ARGENTINA S.A., razón por la cual –se agregó-, las dos principales compañías telefónicas de Argentina –TELEFÓNICA ARGENTINA S.A. y TELECOM ARGENTINA S.A.– quedaron sujetas a un mismo control económico.

4º) Que, por otra parte, se efectuaron las siguientes consideraciones con relación a los presupuestos jurídicos y fácticos anteriores al dictado de la Resolución N° 148/10.

En este marco, se manifestó que, por la Resolución N° 4/2009 dictada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, se estableció que la operación de concentración económica "TELEFÓNICA/TELECOM" requería ser notificada para su previa autorización, en los términos del art. 8º de la ley 25.156. Se alegó que aquella resolución N° 4/09 se encontraría firme y consentida por las partes involucradas.

Asimismo, se explicó que, por la Resolución N° 483/2009 de la Secretaría de Comercio Interior y por el Dictamen N° 744 de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, se consideró que la operación de concentración económica "TELEFÓNICA/TELECOM" afectaba el régimen de la libre competencia en la industria de las telecomunicaciones, razón por la cual, por aquella resolución y dictamen, se subordinó la autorización de aquella operación a la desinversión total de las acciones y activos que TELECOM ITALIA S.P.A. y TELECOM ITALIA INTERNATIONAL N.V. detentaran, en forma directa o indirectamente, en SOFORA TELECOMUNICACIONES S.A. (que sería la compañía *holding* que controlaría indirectamente a TELECOM ARGENTINA S.A.).

5º) Que, por otra parte, por la presentación aludida por el considerando 1º de la presente, se manifestó que la Resolución S.C.I.

CECILIA ROCCA

RAFAEL CAPUTO
JUEZ

SANDRA VIVIANA GONZALEZ
SECRETARIA

Nº 483/2009 fue anulada por la Sala "A" de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, pues aquella Sala "A" entendió que la orden de desinversión fue dirigida, en violación al derecho de defensa, contra dos compañías que no habrían sido parte del proceso de notificación dispuesto por el art. 8 de la Ley 25.156. Se agregó que aquella Sala "A" ordenó que se continúe con la investigación con la participación a TELECOM ITALIA S.P.A. y TELECOM INTERNATIONAL N.V.

6º) Que, por la presentación en estudio, también se puso en conocimiento de que, mientras tramitaban las actuaciones administrativas y judiciales a las cuales se vino haciendo referencia, TELECOM ITALIA S.P.A. incrementó, en un 8%, sus acciones en SOFORA TELECOMUNICACIONES S.A. y, en consecuencia, en forma indirecta sobre TELECOM ARGENTINA S.A.. Se aportó, en aquel sentido y como Anexo Nº 10 (reservado por secretaría), copia del Dictamen Nº 836/10 de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, relacionado con aquella situación.

7º) Que, la parte accionante puso de manifiesto que, por medio de la Resolución Nº 148/10, se subordinó la procedencia de la operación comercial en estudio, al cumplimiento de un compromiso que estaría relacionado exclusivamente con las autoridades internas de TELECOM ITALIA S.P.A. y TELECOM INTERNATIONAL N.V., y que, en consecuencia, aquella resolución resultaría ilegal, en atención a ser violatoria de los arts. 7 y 13 de la Ley 25.156 y al afectar el régimen de libre competencia en el mercado de las telecomunicaciones.

También se explicó que aquella resolución, además de contradecir lo dispuesto por la Resolución S.C.I. Nº 483/2009, sería auto-contradictoria, en atención a que pretendería remediar la monopolización del mercado de las telecomunicaciones sin ninguna orden de desinversión, ni compromiso por parte de las empresas que se encuentran en aquel mercado.



8º) Que, por la presentación mencionada por el considerando 1º de la presente (ver apartado IV titulado **Antecedentes**), se brindó una explicación de la supuesta maniobra llevada adelante.

Así, se indicó que, con fecha 28 de abril de 2007, TELEFÓNICA S.A., adquirió, junto con ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A., INTESA SAN PAOLO S.P.A., MEDIOBANCA S.P.A. y SINTONÍA S.A., el 23,6% de las acciones y derechos políticos de TELECOM ITALIA S.P.A. proveniente de PIRELLI & C. S.P.A., SINTONÍA S.P.A. y SINTONÍA S.A. Aquella adquisición habría sido realizada mediante una empresa *holding* denominada TELCO.

Por otra parte, se explicó que TELECOM ITALIA S.P.A., tendría, en forma directa e indirectamente, en Argentina, el 50% del capital social, de SOFORA TELECOMUNICACIONES S.A., la cual controlaría, por intermedio de NORTEL INVERSORA S.A., a TELECOM ARGENTINA S.A. Se aclaró que el otro 50% restante de SOFORA TELECOMUNICACIONES S.A. pertenecería a W. DE ARGENTINA INVERSIONES S.L. (que sería el titular del 48% del capital social), a FRANCE CABLE ET RADIO S.A. (que sería el titular del 1,3 % del capital social) y a ATLAS SERVICES BELGIUM S.A. (que sería titular del 0,7% del capital social).

Finalmente, por la presentación en estudio, se manifestó que el control que ejercería TELECOM ITALIA S.P.A. sobre TELECOM ARGENTINA S.A. y TELECOM PERSONAL S.A. se habría incrementado, en atención a que el porcentaje accionario de TELECOM ITALIA S.P.A. sobre SOFORA TELECOMUNICACIONES S.A. sería del 58%, a raíz de que TELECOM ITALIA S.P.A. le habría comprado un 8% de las acciones a W. DE ARGENTINA INVERSIONES S.L. En consecuencia -se añadió- actualmente, las acciones de SOFORA TELECOMUNICACIONES S.A. están distribuidas en un 58% a favor de TELECOM ITALIA S.P.A. y en un 42% a favor de W. DE ARGENTINA INVERSIONES S.L.


CECILIA ROCCA


RAFAEL CAPUTO
JUEZ


SANDRA VIVIANA GORI
SECRETARÍA

9º) Que, asimismo, por la presentación detallada por el considerando 1º de la presente, se manifestó que los derechos de administración y dirección de TELECOM ITALIA S.P.A. sobre SOFORA TELECOMUNICACIONES S.A., NORTEL INVERSORA S.A. y TELECOM ARGENTINA S.A., serían superiores a los de W. DE ARGENTINA INVERSIONES S.L., y que aquella información surgiría de los acuerdos de accionistas suscriptos entre TELECOM ITALIA INTERNATIONAL N.V. y W. DE ARGENTINA INVERSIONES S.L., detallados por el Dictamen N° 373 emitido por la Secretaría de Coordinación Técnica de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia el día 14 de noviembre de 2003, el cual se acompañó en copia (ver Anexo N° 1 de aquella presentación inicial).

También se aclaró que, por los acuerdos mencionados por el párrafo precedente, el directorio de TELECOM ARGENTINA S.A. estaría compuesto por seis miembros, de los cuales cinco serían designados por NORTEL INVERSORA S.A. y, el restante, por los accionistas minoritarios. Asimismo –se dijo–, de los cinco miembros que designaría NORTEL INVERSORA S.A., tres serían designados por TELECOM ITALIA INTERNATIONAL N.V. y dos serían designados por W. DE ARGENTINA INVERSIONES S.L.

En este marco, se explicó que TELECOM ITALIA S.P.A. designaría los presidentes de NORTEL INVERSORA S.A. y de TELECOM ARGENTINA S.A., y que, en caso de empate en el directorio, a aquellos presidentes se les otorgaría doble voto, circunstancia que habría sido reconocida por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 16 al momento de resolver una medida cautelar.

10º) Que, por la presentación de fs. 1 ter /50, se explicó (ver apartado IV. 2- **La resolución CNDC N° 4/2009**), que por esta última resolución, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia estableció que la operación que se estudia en las presentes actuaciones constituiría una concentración económica, razón por la cual, se habría ordenado su notificación en los términos del art. 8 de la



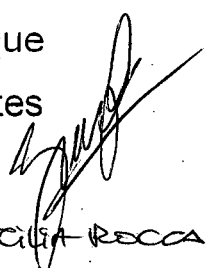
Ley 25.156. Por aquella misma decisión –se agregó– se resolvió que, mientras se tramitaban las correspondientes notificaciones, se suspendía el ejercicio de ciertos derechos políticos por parte del consorcio adquirente, y los directores y síndicos de SOFORA TELECOMUNICACIONES S.A., NORTEL INVESORA S.A., TELECOM ARGENTINA S.A. y TELECOM PERSONAL S.A. debían abstenerse de realizar cualquier acto que implicara contrariar lo dispuesto por la Resolución N° 4/2009.

11º) Que, asimismo, la parte accionante manifestó que, por aquella resolución N° 4/09 y por otra resolución de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, de fecha 16 de octubre de 2007, se habrían designado dos veedores para actuar en el seno de TELECOM ARGENTINA S.A., quienes habrían sostenido que, de concretarse la adquisición de TELECOM ITALIA S.P.A. por parte de TELEFÓNICA ARGENTINA S.A., se vulneraría el Capítulo III del Decreto N° 62/1990.

En este orden de ideas, los veedores también habrían destacado que, por el Decreto N° 264/1998 se habría intentado asegurar a los consumidores la libertad de elección, previniendo conductas monopólicas; y que, por el art. 5 de aquel decreto, se habría establecido que las sociedades deberían acreditar, antes de la adjudicación de las respectivas licencias, no tener vínculos societarios o accionarios, ni sujeción económica o jurídica con las sociedades licenciatarias entre sí, sus accionistas directos o indirectos, sus operadores y, en todos los casos, las sociedades controladas por aquéllos.

En razón de todo lo dicho anteriormente, los veedores expresaron –se agregó por la presentación en estudio– que la verificación de la existencia de cualquiera de aquellas circunstancias, daría derecho a declarar la caducidad de la licencia conforme lo dispuesto por el art. 38 del Decreto N° 1185/90.

Por otra parte –se agregó–, los veedores entendieron que la operación de concentración económica en análisis en las presentes


CECILIA ROCCA


RAFAEL CAPUTO


SANDRA VIVIANA GORI
SECRETARIA

actuaciones, permitiría que TELEFÓNICA ARGENTINA S.A. acceda sistemáticamente a información estratégica de su principal competidor en Argentina (TELECOM ARGENTINA S.A.).

12º) Que, por el apartado IV.3.1.- **Informe de la Secretaría de Comunicaciones**, de la presentación de fs. 1 ter /50, la parte accionante manifestó que, a efectos de emitir su Dictamen y de conformidad con lo dispuesto por el art. 16 de la Ley 25.156; la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia solicitó a la Secretaría de Comunicaciones que se expidiera sobre los efectos de la operación en estudio.

En este contexto –se agregó-, aquella secretaría concluyó: *“En la Operación bajo examen, se observa que la participación de Telefónica de España en Telecom Italia generaría una participación indirecta de Telefónica de España en Personal y en Movistar, las que son prestadores del servicio móvil con idénticas áreas de servicio. La Operación, por tanto, genera una titularidad común de uno de los socios de las empresas controlantes en dos de las empresas celulares en operación en Argentina, lo que contradice las condiciones de otorgamiento de las licencias de dichas operaciones celulares...”*.

13º) Que, por el apartado IV.3.2.1.- **Problemas de defensa de la competencia particulares acreditados por la CNDC en su Dictamen N° 744**, de la presentación detallada por el considerando 1º de la presente, se hizo mención a los problemas que –a juicio de la parte accionante- se generarían en el mercado de las telecomunicaciones en el caso de mantenerse la concentración económica en estudio. Se detallaron con precisión aquellos efectos, relacionados con los siguientes rubros de aquel mercado:

- telefonía fija;
- acceso a Internet;
- telefonía de larga distancia nacional e internacional;
- conformación de mercado convergente de servicios residenciales;
- servicios minoristas corporativos;




- servicios de telefonía pública;
- telefonía móvil;
- efectos horizontales en los mercados mayoristas de telecomunicaciones;
- efectos verticales en los mercados mayoristas y minoristas de las telecomunicaciones;
- barreras a la entrada en los mercados de mayoristas o de infraestructura (acceso mayorista a internet, transporte y acceso local);
- barreras a las entradas en los mercados minoristas (telefonía fija local, telefonía de larga distancia nacional e internacional, telefonía móvil, acceso a internet minorista y servicios de telecomunicaciones al sector corporativo).

En aquel marco, por la presentación en estudio, se concluyó en que, de autorizarse la operación, no existiría la posibilidad de ingreso rápido, probable y significativo al mercado afectado, por parte de algún competidor potencial. Asimismo, se entendió que la operación afecta en forma negativa la competencia en los principales mercados relevantes del sector de telecomunicaciones, así como también afecta las posibilidades de desarrollo competitivo de mercados convergentes.

14º) Que, la parte accionante explicó que, después de producida la anulación de la Resolución S.C.I. Nº 483/2009 por la Sala "A" de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, con fecha 12 de octubre de 2010, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia emitió el Dictamen Nº 835/10, por el cual volvió a expedirse respecto a la operación de concentración en discusión y reiteró que aquella operación infringiría el art. 7 de la Ley 25.156.

Sin perjuicio de aquello –se agregó–, aquella comisión sostuvo que el compromiso presentado por las partes limitaría los efectos nocivos y/o lesivos para la competencia que se derivaban de aquella operación, razón por la cual, por aquel dictamen, se aconsejó a la Secretaría de Política Económica aceptar dicho compromiso y subordinar la autorización de la operación en los términos del art. 13

[Firma]
CESILIA ROCCA


Fm. CAPUTO
JUR.


SANDRA VIVIANA GOÑI
SECRETARÍA

inc. b) de la ley 25.156 al cumplimiento irrevocable y efectivo del compromiso ofrecido con las aclaraciones y precisiones efectuadas en el título XIV de aquel dictamen.

15º) Que, por la presentación aludida por el considerando 1º de la presente, se expresó que, por aquel dictamen N° 835/10, se hizo mención a la afectación al régimen de la libre competencia y a la violación al art. 7 de la ley 25.156, pero no se propuso la desinversión dispuesta por la Resolución N° 483/09, sino que se acepte el compromiso presentado por las empresas involucradas, a cuyo cumplimiento se aconsejó subordinar la autorización de la operación.

Por otra parte, la accionante aclaró que, por aquel dictamen, se citó nuevamente el informe de los veedores con relación a la normativa regulatoria vulnerada en caso de aprobarse la operación, por el cual aquéllos señalaron los problemas de competencia y regulatorios que plantearía la operación (ver considerando 11º de la presente).

16º) Que, a modo de conclusión, la parte accionante manifestó que la investigación que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia realizó por el Dictamen N° 835 es similar a la realizada en el Dictamen N° 744 y arriba a idénticas conclusiones, a saber: la operación afecta al régimen de la libre competencia y resulta violatoria del art. 7 de la Ley N° 25.156. No obstante aquello, por aquel dictamen N° 835/10, se deja a salvo que, en vez de ordenar nuevamente la desinversión dispuesta por la Resolución S.C.I. N° 483/2009, se propone la aceptación de un compromiso presentado por las empresas involucradas y que se subordine la autorización al cumplimiento de aquel compromiso.

17º) Que, por el apartado **IV.5.2.4.2- Términos y condiciones del compromiso**, de la presentación detallada por el considerando 1º de la presente, se explicó que el compromiso presentado fue suscripto por TELEFÓNICA S.A., ASSICURAZIONI



GENERALI S.P.A., MEDIOBANCA S.P.A., INTESA SAN PAOLO S.P.A., TELCO S.P.A., TELECOM ITALIA S.P.A., TELECOM ITALIA INTERNATIONAL N.V., SOFORA TELECOMUNICACIONES S.A., NORTEL INVERSORA S.A., TELECOM ARGENTINA S.A., TELECOM PERSONAL S.A., TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. y TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.

Se agregó que W. DE ARGENTINA INVERSIONES S.L. estuvo exceptuada de aquella suscripción, no obstante que participaría, indirectamente, en el capital accionario de TELECOM ARGENTINA S.A.

La parte accionante agregó que aquel compromiso fue reproducido por el Dictamen N° 835, y que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia entendió que el objetivo primordial de aquel compromiso era asegurar la separación e independencia de las actividades en el mercado argentino de TELEFÓNICA S.A., y sus controladas, por un lado, y, por el otro, de TELECOM ITALIA S.P.A., TELECOM ITALIA INTERNATIONAL N.V., SOFORA TELECOMUNICACIONES S.A., NORTEL INVERSORA S.A., TELECOM ARGENTINA S.A., TELECOM PERSONAL S.A.

Asimismo, por la acción intentada se hizo mención a las obligaciones asumidas por aquellas empresas y a las recomendaciones regulatorias efectuadas por aquel dictamen.

18º) Que, la parte accionante mencionó, por el apartado IV.8. de la presentación de fs. 1 ter /50, los términos de la Resolución N° 148/2010 de la Secretaría de Política Económica (que se adjuntó en copia como Anexo N° 8, reservado por secretaría), e hizo mención a que, entre otras cuestiones, por aquella resolución, se procedió a subordinar la autorización de la operación en los términos del art. 13 inc. b) de la Ley N° 25.156 al cumplimiento irrevocable y efectivo del compromiso mencionado por el considerando precedente.

Se aclaró que el único argumento de aquella resolución para aceptar el compromiso es que, por aquel acuerdo, se "limita los

[Firma]
Gustavo Roca


RAFAEL CACERIO
JUEZ


SANDRA VIVIANA GONI
SECRETARIA

efectos claramente nocivos y/o lesivos para la competencia, que tal operación podría aparejar”.

19º) Que, por el apartado V de la presentación de fs. 1 ter /50, se hizo mención a la legitimación activa de la asociación que efectuó la presentación mencionada.

Asimismo, por el apartado VI de aquella presentación, se explicó la procedencia de la acción intentada por parte de terceros afectados por las supuestas restricciones al régimen de la libre competencia, causadas por las decisiones de la Autoridad de Aplicación de la Ley 25.156.

20º) Que, por aquella acción –además-, se realizó una extensa explicación respecto de la ilicitud, a criterio de la accionante, de la Resolución Nº 148/2010 (ver apartado VIII de aquella presentación).

Asimismo, se aportó como prueba documental los diferentes dictámenes y resoluciones emitidos por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, la Secretaría de Comercio Interior, la Secretaría de Política Económica y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, mencionados durante el desarrollo de la presentación aludida por el considerando 1º de la presente.

Por otra parte, se solicitó que se libre oficio a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia a fin de requerirle el Expediente Nº S01:0014652/2009, como así también todas las actuaciones relacionadas con la operación denunciada en la presente causa.

También se solicitó que se cite a prestar declaración testimonial a los veedores mencionados por el considerando 11º de la presente, y a otros expertos a fin de que se les pregunte por los efectos de la operación denunciada en la presente causa.

Por último, se solicitó que se libre oficio al Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial Nº 16, Secretaría Nº 32, a fin de

requerirle copia de la medida cautelar dispuesta por aquél, mencionada por el considerando 9º de la presente.

En definitiva, finalmente y conforme fue adelantado por el considerando 1º de la presente, la parte accionante solicitó que se haga lugar a la demanda, se revoque y se declare la ilegalidad de la Resolución Nº 148 de la Secretaría de Política Económica y se prohíba la operación o se la subordine a la desinversión por parte de TELECOM ITALIA S.P.A. y de TELECOM ITALIA INTERNATIONAL N.V. de todas las acciones que detenten, directa o indirectamente, en SOFORA TELECOMUNICACIONES S.A., NORTEL INVERSORA S.A., TELECOM ARGENTINA S.A. y TELECOM PERSONAL S.A.

Por último, se petitionó que, en subsidio, se revoque la mencionada Resolución Nº 148 y se ordene a la autoridad de aplicación de la Ley Nº 25.156 que dicte una nueva resolución que impida la afectación al régimen de la libre competencia.

21º) Que, como consecuencia de la presentación obrante a fs. 1 ter/50 y reseñada por los considerandos anteriores, a fs. 57/58, el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 6 (Secretaría Nº 12), resolvió declarar la incompetencia de aquel juzgado y remitir la causa a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.

En aquella oportunidad, el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 6 expresó: "...entiendo que resulta aplicable al caso de autos el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos 329:860, en el cual adhirió al dictamen del Sr. Procurador Fiscal subrogante quien atribuyó el conocimiento a la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico en un conflicto de competencia territorial suscitado entre la Sala 3 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal y la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario...".

Aquel juzgado Nº 6, expresó, además: "...en el dictamen aludido se concluyó que, aún cuando el precepto legal no especifica el tribunal competente para entender en tales recursos, una

[Firma]
García Roca

Rm. ... APUTO
JUEZ

SANDRA VIVIANA BONI
SECRETARIA

interpretación acorde con los principios manifestados en los considerandos del decreto de veto 1019/01 indica que se pretendió mantener la competencia que la derogada ley 22.262 atribuía a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico...”.

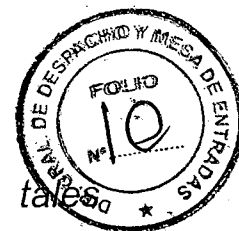
Se agregó que “...lo expuesto guarda coherencia con el art. 56 de la ley 25.156, norma en la cual había fundado su reclamo el actor, que dispone la aplicación de los Códigos Penal y Procesal Penal de la Nación en cuanto sean compatibles con las disposiciones de la ley...”.

Por último, el juzgado mencionado del fuero civil y comercial federal señaló que “...no se trata en la especie de un recurso de apelación contra una decisión de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia [y que] la adecuada investigación de los extremos fácticos relativos a la presunta concreción de una conducta anticompetitiva exige una tarea de indagación que... compromete facultades de carácter instructorio por parte del órgano jurisdiccional requerido. Dichas facultades... se encuentran en cabeza del juez en lo penal económico...”.

22º) Que, a fs. 62, el apoderado de la Asociación para la Defensa de la Competencia apeló la resolución de fs. 57/58 (reseñada por el considerando anterior).

Como consecuencia de aquel recurso, a fs. 81/82, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, resolvió confirmar la resolución obrante a fs. 57/58.

En aquella oportunidad, aquella Sala I manifestó que “...la cuestión planteada en este proceso, guarda íntima relación con la resuelta por la Corte Suprema de Justicia en la Competencia nº 875 XLV “Telecom Italia spA y otro s/solicitud de inhibitoria”...en la que se aplicó una solución de especie, destacando que la Concentración 741 había provocado una decisión de la Sala A del fuero Penal Económico, con competencia revisora de la decisión final tomada por el Secretario de Comercio por resolución 483/09 en el marco del Expediente Nº



S:01:0014652/2009...circunstancia que motivó la remisión de tales actuaciones al mencionado Tribunal...”

23º) Que, luego de dictada la resolución de la Alzada del fuero civil y comercial federal reseñada por el considerando anterior, la presente causa fue remitida, con fecha 7 de diciembre de 2011, a este fuero en lo penal económico y, consecuentemente, a fs. 91, el expediente fue recibido en la Mesa de Entradas de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. Resultó desinsaculado este juzgado, con fecha 14 de diciembre de 2011, y el expediente fue remitido a la sede de este juzgado con fecha 15 de diciembre de 2011.

24º) Que, radicada la causa en este juzgado, a fs. 97/98, este juzgado resolvió elevar la causa a la Sala “A” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.

En aquella oportunidad, este juzgado expreso que: “...la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal entendió que la competencia en el sub examine debe decidirse en el mismo sentido en el cual se decidió en la Competencia Nº 875 XLV por la cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación atribuyó competencia a la Sala “A” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico...”. Se agregó, en aquel marco: “...lo cierto es que la declaración de incompetencia emanada del fuero en lo Civil y Comercial Federal interpretada a partir de la decisión del Superior de este último fuero, fue dictada a favor de la Sala “A” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico...”.

En este contexto, se concluyó en que “...se debe elevar estas actuaciones a aquella Sala “A” a favor de la cual se declaró la incompetencia que motivó la formación de esta causa...”.

25º) Que, a fs. 100, aquella Sala “A” resolvió devolver la causa a este juzgado a fin de que se le dé el trámite correspondiente

[Firma]
CECILIA ROCCO

Rm. SAPUTO
JUEZ

SANDRA VIVIANA GONI
SECRETARIA

de conformidad con lo dispuesto por el art. 48 del C.P.P.N. y el art. 8 del C.P.C. y C.N.

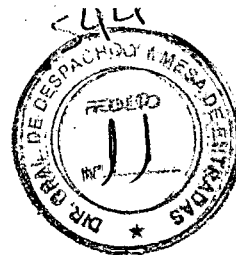
En este contexto, a fs. 102, se ordenó formar "Incidente de declinatoria de competencia", en el marco del cual, y con relación a la posible competencia de este juzgado para entender en la presente causa, se ordenó correr vista a las partes.

Así, la fiscalía interviniente, a fs. 149/151vta., expresó que *"...Habiendo efectuado un sucinto relato de la intervención de la Sala "A" de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico en las resoluciones dictadas en el expediente administrativo al que se hace alusión en la demanda interpuesta por la Asociación para la Defensa de la Competencia, se advierte que dicho Tribunal de Alzada ha tomado intervención revisora en numerosas decisiones acaecidas en el mismo..."*.

La fiscalía también manifestó, en aquella oportunidad, que *"...la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha entendido que, al haberse reconocido por las partes la competencia material de dicho Tribunal, corresponde extender esa competencia para conocer en todos los recursos promovidos en el procedimiento administrativo contra las resoluciones dictadas por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia..."*.

Por último, por aquel dictamen, se expresó que *"...no debe soslayarse que en los casos como el presente, sólo pueden entender los Tribunales de Alzada, ya sea por lo establecido en la Ley 25.156...o por lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que otorga competencia a este Fuero Penal Económico, no interviniendo en ningún supuesto los Tribunales de instancia anterior..."*.

En este marco, a fs. 152/153, la parte demandante se expidió sobre la competencia, y manifestó que *"...Mi parte encuadró la acción como una demanda impugnativa y no como un recurso directo de apelación previsto en los Arts. 52 y 53 de la Ley Nº 25.156 en virtud de que la jurisprudencia del fuero Civil y Comercial Federal, que consideramos competente para conocer en esta causa, no acepta*

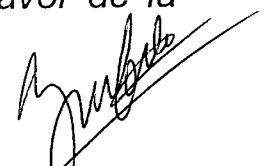



recursos directos de apelación de terceros afectados en el caso de afectaciones a la libre competencia causados por concentraciones económicas...La circunstancia de que el fuero Civil y Comercial Federal se haya declarado incompetente para conocer esta causa en virtud de que la Sala A de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico actuó con "competencia revisora" en decisiones previas al dictado de la Resolución impugnada permite, por razones de economía procesal, encuadrar esta acción como un recurso directo de apelación dirigido contra la Resolución SPE N° 148/2010...Dado que la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico ha tomado conocimiento y ha resuelto nulidades de resoluciones administrativas dictadas previamente en el Expediente que concluyó con el dictado de la resolución impugnada, solicitamos que se eleve esta causa a la Sala A para que tome la intervención que corresponda..."

26º) Que, practicada así la sustanciación de la cual se da cuenta por el considerando anterior, a fs. 155/157, este juzgado resolvió elevar nuevamente la causa a la Sala "A" de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.

Por aquella decisión se dijo que: "...más allá de lo decidido por el Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal N° 6 en el sentido de que debía designarse un juzgado de este fuero en lo Penal Económico...lo cierto es que la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal entendió, también en este caso en coincidencia con la postura de los interesados presentados en esta causa, que la competencia en el sub examine debe decidirse en el mismo sentido en el cual se decidió en la Competencia N° 875 XLV, por la cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación atribuyó competencia a la Sala "A" de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico..."

Se agregó: "...la declaración de incompetencia emanada del fuero en lo Civil y Comercial Federal interpretada a partir de la decisión del Superior de este último fuero, fue dictada a favor de la


CECILIA ROCCA


RAFAEL CAPUTO
JUEZ


SANDRA VIVIANA GONI
SECRETARIA

Sala "A" de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico...

Por último, se expresó que "...este juzgado coincide con la postura expresada por el serio, claro y adecuadamente fundado dictamen de la fiscalía...en el sentido de que por la lectura de la ley 25.156, no se avisa la intervención de un juzgado de primera instancia en los procedimientos regulados por aquella ley..."

27º) Que, a fs. 167/167 vta., la Sala "A" de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, resolvió devolver las actuaciones a esta sede de primera instancia, a fin de que se le dé trámite de conformidad con lo previsto por la ley 16.986.

Por aquella resolución, aquella Sala "A" expresó: "...Que se trata de una demanda interpuesta para invalidar una resolución dictada por autoridades del gobierno nacional en el área económica. El demandante invoca la afectación al derecho de libre competencia. Que la ley que rige en materia de defensa de la competencia, N° 25156, no contempla un remedio judicial apropiado para esa clase de reclamos. La única intervención judicial que establece es una apelación que debe interponerse en un plazo perentorio y que se encuentra fuera del alcance de quienes, como la actora en este caso, no han sido partes en el trámite seguido ante la autoridad de aplicación. Que cuando se trata de derechos que protegen la competencia y no existe otro medio judicial más idóneo el artículo 43 de la Constitución Nacional dispone que se puede interponer una acción de amparo. Que resulta de aplicación en consecuencia la ley que rige en materia de amparo, N° 16986, en la que está previsto que deben conocer de la acción los jueces de primera instancia con jurisdicción en el lugar y si bien en el caso resulta opinable la competencia en razón de la materia, está expresamente previsto que el juez de primera instancia que fuera requerido debe conocer igualmente no obstante la existencia de dudas razonables a ese respecto. Tal lo que establece el artículo 4º de la ley."



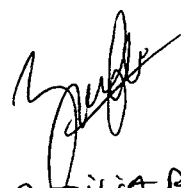
En aquella oportunidad, además, el tribunal Superior mencionado expresó: *"Que si bien esa disposición debería haber sido observada por el juez de primera instancia en lo civil y comercial federal ante quien se dedujo originariamente la demanda, obvias razones de economía procesal indican la inconveniencia de seguir prolongando la cuestión de competencia al cabo de un año y medio de que fuera iniciada, a lo que debe añadirse que, en la actualidad, tanto la representante del ministerio público como la parte actora coinciden en la competencia de los tribunales en lo penal económico."*

Se argumentó finalmente: *"Que está previsto asimismo en la ley de amparo que los tribunales de alzada correspondientes conozcan en los recursos que pueden interponerse contra las resoluciones de los jueces de primera instancia (artículo 15). Que de admitirse la intervención del tribunal de apelación en la instancia inicial se privaría a los interesados de la instancia de revisión que la ley les acuerda. Que, de todas maneras, no se advierten razones por las que deba prescindirse de la distribución de competencia en razón del grado que se encuentra prevista en la ley de amparo."*

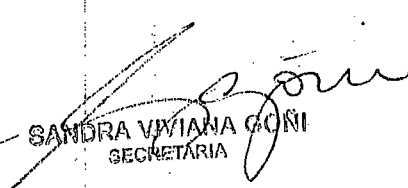
En este marco, la Sala "A" de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, dispuso *"...DEVOLVER las actuaciones al juez a quo a fin de que les dé trámite de conformidad con lo previsto en la ley 16986..."*.

289) Que, a fs. 108/140, la parte accionante que efectuó la presentación de fs. 1 ter /50 denunció un hecho nuevo y, en consecuencia, hizo saber que, con posterioridad a la interposición de la presente acción, TELECOM ITALIA S.P.A. adquirió de parte de W. DE ARGENTINA INVERSIONES S.L. el 10% adicional de las acciones de SOFORA TELECOMUNICACIONES S.A.

En aquel marco, la accionante se remitió a su presentación originaria, en lo atinente a los argumentos jurídicos y económicos (fs. 1ter/50), y aclaró que aquella nueva adquisición constituye, a juicio de aquella parte, un incumplimiento del compromiso aceptado por el art. 5 de la Resolución S.P.E. Nº 148/10 cuya nulidad se demandó.


CECILIA ROCCA


RAFAEL CAPUTO
JUEZ


SANDRA VIVIANA GONI
SECRETARIA

29º) Que, a fs. 176 se recibió el expediente N° 8507/10 caratulado "AMX ARGENTINA S.A. y otro c/ESTADO NAC.- MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEC. DE POL ECONOMICA y otros s/nulidad del acto administrativo" proveniente del Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial N° 10, Secretaría N° 19.

En aquel marco, y toda vez que el objeto de la causa mencionada por el párrafo anterior sería, en principio, idéntico al de la presente causa, se ordenó la acumulación jurídica de aquel expediente N° 8507/10 al presente N° 2497/2011, y se lo hizo correr por cuerda a la presente causa (ver fs. 176).

No obstante, a fs. 462, punto 1º, ante aquella identidad de objeto y; ahora por razones prácticas, se ordenó acumular materialmente la causa N° 8507/10 a la presente N° 2497/2011.

30º) Que, si bien -se reitera- el objeto de la causa N° 8507/10 sería prácticamente idéntico al contenido de la presentación que dio origen a la presente causa N° 2497/2011, lo cierto es que, en algunos aspectos, la presentación obrante a fs. 282/351, resulta novedosa.

En efecto, por aquella presentación, los demandantes, en este caso, AMX ARGENTINA S.A. y TELMEX ARGENTINA S.A., explicaron que, con fecha 5 de marzo de 2008, AMX ARGENTINA S.A. denunció la monopolización de la industria de las telecomunicaciones y solicitó, además, la intervención de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, en atención a la omisión de notificar la operación de concentración económica mediante la cual TELEFÓNICA S.A. junto con ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A., INTESA SAN PAOLO S.P.A., MEDIOBANCA S.P.A. y SINTONÍA S.A. habrían adquirido una parte de las acciones de TELECOM ARGENTINA S.A.

En este marco, AMX ARGENTINA S.A. -se agregó- solicitó que se le ordenara a TELEFÓNICA S.A. y a las demás partes intervinientes que notificaran, en los términos del art. 8º de la ley N° 25.156, aquella operación de concentración económica y que, cuando

correspondiera, se denegara la autorización de aquella operación por ser contraria al régimen de libre competencia.

Por aquella presentación mencionada por el segundo párrafo del este considerando, también se explicó que, con fecha 26 de marzo de 2008, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia citó a AMX ARGENTINA S.A. a una audiencia a los efectos de que ratificara aquella denuncia.

Posteriormente -se agregó-, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia dictó una resolución, de fecha 25 de noviembre de 2008, mediante la cual dispuso ordenar el traslado de la denuncia sólo con relación a la conducta anticompetitiva y desestimó la denuncia por la omisión de notificar la operación. Por otra parte, ordenó extraer copias de la denuncia e incorporarlas a la investigación que aquella comisión llevaba adelante por la omisión de notificar la operación investigada en la presente causa, que tramitaba en el Expediente D.P. N° 29.

A raíz de lo resuelto por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, conforme fue mencionado por el párrafo que antecede, los nuevos denunciantes agregaron que, AMX ARGENTINA S.A., con fecha 11 de noviembre de 2008, solicitó vista del expediente D.P. N° 29, en atención a que los hechos allí investigados serían los mismos que estaba denunciando aquella sociedad. Aquel pedido fue rechazado -se dijo-, con fecha 19 de noviembre 2008, por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, en atención a que se entendió que AMX ARGENTINA S.A. no era parte de la investigación y que el sumario era secreto para los extraños.

Se explicó por la presentación de fs. 282/351 que, en consecuencia, con fecha 18 de diciembre de 2008, AMX ARGENTINA S.A. apeló la resolución de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, de fecha 25 de noviembre de 2008, y solicitó que se dispusiera una orden de cese provisoria contra las empresas involucradas en la operación de concentración económica, con el objeto de impedir que TELEFÓNICA S.A. accediera a la información estratégica y ejerciera el control conjunto sobre TELECOM

[Firma]
D. Rocas

USO OFICIAL

RAFAEL CAPUTO
JUEZ

SANDRA VIVIANA GONZALEZ
SECRETARIA

ARGENTINA S.A., hasta que se cumpliera el procedimiento de notificación y autorización establecido por los arts. 8º y 13º de la Ley Nº 25.156.

Posteriormente -se agregó-, con fecha 9 de febrero de 2009, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia dictó la resolución Nº 20/2009, mediante la cual rechazó el recurso de apelación interpuesto por AMX ARGENTINA S.A., en atención a que no existiría normativa en el marco del control previo de concentraciones que habilite a terceros a efectuar presentaciones.

Asimismo -se dijo-, con fecha 9 de enero de 2009, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, dictó la Resolución Nº 4/2009 en el marco del Expediente D.P. Nº 29, mediante la cual hizo lugar a la solicitado por AMX ARGENTINA S.A. en su denuncia.

Por último, a fs. 282/351 se manifestó que, con fecha 17 de diciembre de 2010, en el marco de la notificación de la operación de concentración económica investigada en la presente causa, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia solicitó a AMX ARGENTINA S.A. que aportara información relativa al comportamiento de los precios de mercado.

Cabe agregar que, en este marco, y por aquella presentación de fs. 282/351 (ver apartado V titulado **Legitimación Activa**), se explicó que la legitimación de AMX ARGENTINA S.A. y TELMEX ARGENTINA S.A. para interponer la demanda está fundada en la circunstancia consistente en que aquellas dos sociedades son competidoras afectadas por la operación de concentración económica y, en consecuencia, por la resolución impugnada. Se agregó que aquella circunstancia se encontraría reconocida por el Dictamen Nº 835 de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, por el cual se habría reconocido expresamente la posibilidad de que, como consecuencia de la operación en estudio en las presentes actuaciones, AMX ARGENTINA S.A. termine siendo excluida del mercado de las telecomunicaciones.

Por otra parte, y con relación a TELMEX ARGENTINA S.A., por la presentación de fs. 282/351 se expresó que, por el Dictamen Nº

835 de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, se habría reconocido que aquélla es una competidora de las sociedades denunciadas en el mercado de acceso a internet, en el mercado de larga distancia nacional e internacional, en el mercado de transporte de larga distancia y en el mercado de servicios corporativos.

Asimismo, los nuevos accionantes mencionaron que la operación podría causar la exclusión de TELMEX ARGENTINA S.A. del mercado de acceso de internet por tratarse de un competidor no integrado.

En consecuencia, los nuevos demandantes explicaron que las circunstancias relatadas por los párrafos precedentes son suficientes para reconocer a AMX ARGENTINA S.A. y a TELMEX ARGENTINA S.A., como competidoras del mercado involucrado y como afectadas directas de los problemas de competencia que la operación podría causar.

31º) Que, a fs. 137/140, al denunciar el hecho nuevo relativo a la compra de un 10% adicional de las acciones de SOFORA TELECOMUNICACIONES S.A. por parte de TELECOM ITALIA S.P.A., la Asociación para la Defensa de la Competencia solicitó el traslado a las sociedades denunciadas, de la demanda inicial y de la situación vinculada con aquel hecho nuevo puesto en conocimiento.

Asimismo, a fs. 192/193, aquella parte, consintió la competencia del fuero Penal Económico y el trámite de conformidad con la Ley Nº 16.986 y solicitó, nuevamente, el traslado a las partes, de la demanda y de su ampliación.

En este contexto, la parte actora, a fs. 225, solicitó nuevamente que se corra traslado de la demanda a Estado Nacional y demás personas demandadas y citadas como terceros.

32º) Que, a fs. 228/275vta., el Ministerio de Economía y Finanzas públicas presentó el informe previsto por el art. 8 de la Ley Nº 16.986, por el cual solicitó que se rechace la acción interpuesta por

USO OFICIAL

[Firma]
Escritura

RAFAEL CAPUTO
JUEZ

SANDRA VIVIANA GORI
SECRETARIA

la Asociación para la Defensa de la Competencia en todas sus partes, por resultar inadmisible e improcedente.

Asimismo, aquella representación ministerial solicitó que se rechace la solicitud de prohibición de la operación de concentración económica notificada y/o se subordine aquélla a la desinversión por parte de TELECOM ITALIA S.P.A. y TELECOM ITALIA INTERNATIONAL N.V. de todas las acciones que detentan, directa o indirectamente, en SOFORA TELECOMUNICACIONES S.A., NORTEL INVERSORA S.A., TELECOM ARGENTINA S.A. y TELECOM PERSONAL S.A., en razón de que aquella operación se encuentra actualmente subordinada en los términos establecidos por el art. 13 inc. b) de la Ley N° 25.156.

Por aquella presentación, la representación estatal también solicitó que se rechace la demanda efectuada en subsidio, de revocar la resolución SPE N° 148/2010 y de ordenar a la autoridad de aplicación de la Ley N° 25.156 que dicte una nueva resolución que remedie la afectación al régimen de la libre competencia, en atención a que aquella resolución se encuentra remediando la posible afectación al régimen mencionado.

Asimismo, por aquella presentación del Estado Nacional, se planteó la invalidez de la providencia de este juzgado, con fundamento en lo resuelto por la Sala "A" de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, mediante la cual se transformó arbitrariamente la impugnación planteada por la parte actora en una acción de amparo sin justificación alguna.

Por otra parte, por el apartado V de aquella presentación de fs. 228/275, se desarrollan los fundamentos de lo reseñado por el primer párrafo de este considerando. Específicamente, por el punto V.1 se expusieron las razones de orden constitucional y legal por las cuales aquella parte entiende que es jurídicamente improcedente la acción de amparo. En este sentido, se hizo referencia a la inexistencia de agravio jurídico, a la falta de legitimidad y a la arbitrariedad manifiesta de darle a la demanda el tramite de la Ley N° 16.986, a la existencia de otras vías más idóneas para darle curso a la demanda

interpuesta por la parte actora, a la necesidad de que la demanda tramite con una mayor amplitud de debate o prueba y a la extemporaneidad de la presentación de la acción en los términos de la ley de amparo.

Posteriormente, el Estado Nacional planteó razones de orden constitucional y jurisprudencial, por las cuales, a juicio de aquella parte, se hace improcedente la acción de amparo. Específicamente, se hizo referencia a los requisitos establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "HALABI" y a la falta de legitimación activa por parte de Asociación para la Defensa de la Competencia.

Por último, por aquel informe presentado en los términos del art. 8 de la ley 16.986, se ofreció prueba documental, testimonial e informativa y se planteó la reserva de caso federal.

Cabe destacar finalmente, que, ante la acumulación a la presente causa, de la acción intentada por AMX ARGENTINA S.A. y TELMEX ARGENTINA S.A., la representación del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ante el pertinente pedido de este juzgado, presentó el informe del art. 8 de la Ley N° 16.986, con relación a la situación de aquellas dos sociedades, en términos que, más allá de las particularidades vinculadas con la diferencia de los accionantes, son idénticos a los expresados a fs. 228/275 y que fueron reseñados por este considerando (ver fs. 491/533).

33º) Que, en otro orden de ideas, corresponde destacar que, a fs. 278/279, la Asociación para la Defensa de la Competencia denunció que el informe del art. 8º de la Ley 16.986 de fs. 228/275 fue presentado en forma extemporánea, razón por la cual solicitó su desglose e interpuso recurso de reposición y de apelación en subsidio contra el decreto de este juzgado que tuvo por presentado aquel informe.

Por aquella presentación, se manifestó: "...vengo a denunciar que el Estado Nacional contestó en forma extemporánea el informe del Art. 8 previsto por la Ley de Amparo. Mediante la

[Firma]

USO OFICIAL

RAFAEL CARUTO
JUEZ

SANDRA VIVIANA GONZALEZ
SECRETARIA

resolución del 13 de julio de 2012...V.S. le otorgó al Estado Nacional una prórroga de diez días para presentar el informe del Art. 8. El 30 de julio de 2012 el Estado Nacional se notificó en los términos del art. 134 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación al retirar copia de las actuaciones. En virtud de ello el plazo de diez días dispuesto por V.S. venció el 15 de agosto a las 9.30 hs. computando el plazo de gracia de las dos primeras horas del día siguiente al vencimiento. Ello computando todos los días inhábiles. Conforme surge del cargo obrante en el informe del Art. 8, el mismo fue presentado el 15 de agosto a las 13hs. Es decir, la presentación se efectuó con posterioridad al vencimiento del plazo de la prórroga que V.S. otorgara...”.

De aquel planteo, a fs. 462 punto 2º, este juzgado ordenó correr vista a la fiscalía interviniente y al organismo que presentó el informe del art. 8º de la Ley 16.986.

A fs. 463/vta., en consecuencia, la fiscalía expresó que “...entiende que V.S. no debe hacer lugar al desglose pretendido, puesto que el plazo establecido por la Ley de Amparo, en su artículo 8, no resulta ser perentorio sino meramente ordenatorio. En efecto, nótese que el art. 8º de la Ley 16.986 establece que el informe allí previsto deberá ser evacuado dentro del **plazo prudencial** que fije el Juez, de lo que se advierte que la presentación tardía del mismo (y más aún cuando aquella demora es de tres -3- horas) no justifica de manera alguna el desglose del informe presentado. Asimismo, el desglose petitionado no se encuentra establecido por la normativa en trato como una consecuencia que acarrearía la demora en la presentación del informe previsto por el art. 8 de la normativa en trato, circunstancia que confirma el carácter ordenatorio de dicho plazo...”.

Asimismo, a fs. 471/474, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, solicitó, con relación al planteo de fs. 278/279, que “...se rechace sin más trámite...por ser inadmisibile e improcedente...”. Por aquella presentación, aquella representación estatal, específicamente, manifestó, en cuanto al cómputo de los plazos para la contestación del informe del art. 8º de la Ley 16.986, que: “...ante el



pedido de fijación de plazo de esta parte el plazo otorgado originalmente por V.S. se computaba a partir de la notificación mediante cédula, la cual tuvo lugar el día 3 de julio de 2012, mediante la cual se disponía la presentación del informe requerido en un plazo determinado (10 días hábiles). Por tanto, el vencimiento para presentar el citado informe operaba el día 1º de agosto de 2012. Luego, ante la solicitud de prórroga de diez días hábiles del término aludido, fue concedida con fecha 13 de julio de 2012 y notificada a esta parte mediante cédula, el día 30 de julio de 2012...”.

Aclaro que: “...la prórroga del plazo se computa a partir del vencimiento del plazo originariamente concedido, es decir, desde el 1º de agosto de 2012, de modo que el vencimiento del plazo para presentar el informe operaba el 15 de agosto o en el peor de los casos en las 2 primeras horas del día 16 de agosto de 2012 pues la prórroga del término aludido fue notificado en hora inhábil...” (el resaltado es del original).

34º) Que, a fs. 479/490, la Asociación para la Defensa de la Competencia acompañó documentación, referida a la transcripción del discurso brindado por el Ministro de Planificación, Inversión Pública y Servicios del día 5 de septiembre de 2012, con relación al cual aquella parte actora puso de resalto que el Ministro mencionado habría convalidado, a juicio de aquella parte, los argumentos esgrimidos por aquélla al efectuar la denuncia del hecho nuevo en el marco de la presente causa.

35º) Que, luego de efectuado el pormenorizado detalle de las constancias del expediente que antecede, se advierten una serie de circunstancias que, en líneas generales, ponen de manifiesto un grupo de evidencias por las cuales es posible afirmar que la definición de la procedencia o la improcedencia de considerar ilegal o nula a la resolución objeto de cuestionamiento (resolución 148/2010 de la Secretaría de Política Económica) requiere de una mayor discusión argumental y, además, de un mayor desarrollo de actividad probatoria,

USO OFICIAL

RAFAEL CARUTO
JUEZ

SANDRA VIVIANA GORI
SECRETARIA

a los fines de poder determinar un conjunto de aspectos del contenido de las acciones que dieron origen a esta causa, cuyo sustento argumental y, precisamente, probatorio, resulta, en este estado de cosas, deficitario.

36°) Que, en aquel sentido, corresponde indicar, en primer lugar que, por las presentaciones de fs. 1ter/50 y 282/351, se indicó que TELEFÓNICA S.A., junto con otras cuatro sociedades (ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A., INTESA SAN PAOLO S.P.A., MEDIOBANCA S.P.A. y SINTONÍA S.A.), adquirió, mediante la actuación de una sociedad *holding*, llamada TELCO, el 23,6% de las acciones y derechos políticos de TELECOM ITALIA S.P.A.

Si bien por la lectura de las presentaciones mencionadas por el párrafo anterior y que son objeto de esta decisión, no se indicó ni aclaró qué porcentaje de las acciones y derechos de TELCO, esto es, qué porcentaje de aquel 23,6 %, corresponde a TELEFÓNICA S.A. y qué porcentaje de aquel 23,6 % pertenece a los otros cuatro socios que, junto a TELEFÓNICA S.A. adquirieron aquel 23,6 %, aquella situación se esclarece por la lectura de la resolución atacada (148/10 de la Secretaría de Política Económica) y, particularmente, por la lectura del dictamen N° 835, de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, emitido el día 12 de octubre de 2010, al cual se remite como estructura central por medio de aquella resolución (ver fs. 11259/11810 del expediente SO1: 014652/09, Conc. 741, caratulado: "PIRELLI & C.S.P.A. y otros s/notificación art. 8 de la ley 25.156 (conc. 741), el cual -en copia- obra reservado por secretaría y adelante será identificado como "Expte. 741").

En aquel contexto, por la lectura de fs. 11272 del Expte. 741, se advierte que TELEFÓNICA S.A. posee el 42,3 % de las acciones de TELCO, mientras que las restantes sociedades dueñas del paquete accionario de TELCO tienen las siguientes participaciones: ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.: 28,1%; SINTONÍA S.A.: 8,4%; INTESA SANPAOLO S.P.A.: 10,6% y MEDIOBANCA S.P.A.: 10,6%.



37º) Que, a su vez, conforme surge de fs. 1ter/50 de estos autos principales y de fs. 11283/11284 del Expte. 741, TELECOM ITALIA S.P.A., al momento de la operación comercial cuestionada por las presentaciones en tratamiento, era titular (en forma directa del 32,5% y por medio de TELECOM INTERNATIONAL N.V., del 17,5%) del 50% del capital social de SOFORA TELECOMUNICACIONES S.A., la cual, por su parte, por medio de NORTEL INVERSORA S.A. (en la cual SOFORA TELECOMUNICACIONES S.A. tiene el 83,38% de los votos y el 67,79% del paquete accionario) era titular del 54,74 % de las acciones de TELECOM ARGENTINA S.A. (el resto del paquete accionario de TELECOM ARGENTINA S.A. corresponde en un 4,21 % a propiedad participada, y en un 41,05% a inversores de las Bolsas de Comercio de Buenos Aires, Nueva York y México -de aquel 41,05%, un 19% sería propiedad de las ex Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, un 16 % sería propiedad de inversores institucionales y el 6% restante, sería propiedad de inversores minoristas-).

Cabe destacar que el 50% restante de SOFORA TELECOMUNICACIONES S.A. (controladora de TELECOM ARGENTINA S.A.), pertenecía en un 48% a W. DE ARGENTINA INVERSIONES S.L ("GRUPO WERTHEIN"), en un 1,3% a FRANCE CABLE ET RADIO S.A. y, en un 0,7%, a ATLAS SERVICES BELGIUM S.A. (se aclara que "GRUPO WERTHEIN" habría hecho uso de la opción de compra de este último 2% de las acciones de SOFORA TELECOMUNICACIONES S.A., pero aquella compra no estaría inscripta en el Registro de Acciones de SOFORA TELECOMUNICACIONES S.A.).

38º) Que, por las presentaciones que son objeto de la presente resolución, se agregó que, en materia de poder de decisión en el marco de la actuación interna de TELECOM ARGENTINA S.A., se advierte que, de los 6 directores que componen el directorio de aquella sociedad, tres son designados por TELECOM

[Firma manuscrita]
GECILIA RECCA

USO OFICIAL

RAFAEL CAPUTO
JUEZ

SANDRA VIVIANA GONZALEZ
SECRETARIA

INTERNATIONAL N.V., dos por el "GRUPO WERTHEIN" y el restante por los socios minoritarios.

Por otra parte, de aquellas presentaciones surge que TELECOM ITALIA S.P.A. *"designa los presidentes de NORTEL INVERSORA S.A. y de TELECOM ARGENTINA S.A., lo cual le otorga doble voto en el caso de empate en el Directorio..."*.

39°) Que, en definitiva, por lo expresado por los considerandos 36° a 38°, se advierte que TELEFÓNICA S.A. tendría, según las presentaciones en estudio, un 42,3% (participación de TELEFÓNICA S.A. en TELCO) del 23,6 % de TELECOM ITALIA S.P.A. (participación de TELCO en TELECOM ITALIA S.P.A.). A su vez, esta última sería titular del 50% de SOFORA TELECOMUNICACIONES S.A., la cual, por medio de NORTEL INVERSORA S.A., en el estado de situación tenido en consideración por la resolución cuestionada, sería titular del 54,74% de TELECOM ARGENTINA S.A..

Así, TELEFÓNICA S.A. sólo tendría algo menos de la mitad (42,3%) del 23,6 % de las acciones de sociedad italiana (TELECOM ITALIA S.P.A.) que sería titular del 50% de la sociedad (SOFORA TELECOMUNICACIONES S.A.) que controlaría el 54,74 % de TELECOM ARGENTINA S.A.

Lo expresado significa que la participación indirecta de TELEFÓNICA S.A. en TELECOM ARGENTINA S.A. sería de, aproximadamente, un 2,7%.


Esto es así, pues la tenencia por parte de TELEFÓNICA S.A. del 42,3 % de las acciones de TELCO, significa que TELEFÓNICA S.A. (al tener TELCO el 23,6 % de TELECOM ITALIA S.A.) tiene el 9,98 % de TELECOM ITALIA S.P.A. A su vez, si TELECOM ITALIA S.P.A. tiene el 50 % de SOFORA TELECOMUNICACIONES S.A., entonces TELEFÓNICA S.A. (que tiene cerca del 10% de TELECOM ITALIA S.P.A.), sólo tendría el 5% de SOFORA TELECOMUNICACIONES S.A.. Si esta última, a su vez (por intermedio de NORTEL INVERSORA S.A.), es titular del 54,74 %, de

TELECOM ARGENTINA S.A., aquel 5% de TELEFÓNICA S.A. en SOFORA TELECOMUNICACIONES S.A., se transforma en un 2,7 % de las acciones de TELECOM ARGENTINA S.A.

40°) Que, en aquel marco, y en lo atinente al poder de decisión que TELEFÓNICA S.A. tendría en el ámbito de las determinaciones a tomar en el directorio de TELECOM ARGENTINA S.A., se advierte que, si bien TELECOM ITALIA INTERNATIONAL N.V. (y, en consecuencia, TELECOM ITALIA S.P.A.) tendría la posibilidad de designar tres de los seis directores de TELECOM ARGENTINA S.A. (ver fs. 11546/11548 del Expte. 741), lo cierto es que, en atención a que TELEFÓNICA S.A. sería "dueña" por sí sola, de cerca del 10% de aquella sociedad italiana, no es posible afirmar que TELEFÓNICA S.A. por sí sola tenga capacidad para dominar, haciendo caso omiso de la voluntad de los restantes socios de la sociedad italiana mencionada, las decisiones que tomen los tres directores que representan a la sociedad italiana en TELECOM ARGENTINA S.A.. Así, TELEFÓNICA S.A., al tener bajo su poder directo sólo al 10% de las acciones de TELECOM ITALIA S.P.A., no llegaría con absoluta facilidad a dominar la voluntad de decisión, ni siquiera de uno de los tres directores que la sociedad italiana designa en la argentina TELECOM ARGENTINA S.A.

41°) Que, como consecuencia de lo expresado por los considerandos 36° a 40° de la presente, la primera situación deficitaria que se genera por la lectura de las presentaciones de fs. 1ter/50 y fs. 282/351, está dada por la circunstancia de que no es posible afirmar, *a priori*, y sin efectuar el pertinente estudio del funcionamiento en el tiempo de la actividad de las sociedades demandadas (en el marco del compromiso aprobado por la resolución 148/10 objeto de ataque de la presente acción), si con la posesión indirecta de sólo el 2,7% del capital de TELECOM ARGENTINA S.A., TELFÓNICA S.A. tiene el poder necesario como para poder determinar, por sí sola, los designios de las políticas de TELECOM ARGENTINA S.A., de manera

[Firma]
Cecilia Rocas


RAFAEL CAPUTO
JUEZ


SANDRA VIVIANA ZORZI
SECRETARIA

tal de que aquellos designios coincidan con los de TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. (controlada por TELEFÓNICA S.A.) y se verifique, en consecuencia, la situación apuntada a fs. 2 por una de las partes actoras, en el sentido de que ambas sociedades (y sus operadoras en el mercado de telefonía móvil -PERSONAL y MOVISTAR-) *"...quedaron sujetas a un mismo control económico..."*.

Lo expresado por el párrafo anterior es así, máxime si, además, conforme fue indicado por el considerando 40° de la presente, TELEFÓNICA S.A. ni siquiera tendría -con su porcentaje indirecto de participación en TELECOM ARGENTINA S.A. (42,3 %, del 23,6 %, del 50% de SOFORA TELECOMUNICACIONES S.A., la cual, por medio de NORTEL INVERSORA S.A., controla el 54,74% TELECOM ARGENTINA S.A.)-, el poder de dominio sobre ni siquiera uno de los seis directores de TELECOM ARGENTINA S.A.

42°) Que, en aquel contexto, corresponde poner de resalto que, por el contenido de las presentaciones que son objeto de la presente causa, se hace remisión a un informe que la Secretaría de Comunicaciones habría elevado a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, como paso previo a que esta última emitiera el dictamen N° 744/09.

Por aquel informe, aquella secretaría expresó: *"...debe indicarse que la Operación por la cual el controlante de una LSB, que además es su Operador, adquiere una **participación relevante (como principal accionista de la sociedad de control) en la otra LSB, no puede ser autorizada...**"* (el resaltado es de la presente).

Lo expresado por el párrafo anterior debe ser destacado pues pone de manifiesto que, a los fines del rechazo de la operación comercial que se cuestiona, resulta necesaria la existencia de una *"...participación relevante..."*, y/o la existencia de un controlador que sea *"...principal accionista..."* en la sociedad controlada. En aquel contexto, aquel 2,7% que TELEFÓNICA S.A. tendría en el capital de TELECOM ARGENTINA S.A. no puede ser definido sin más y sin lugar a ningún tipo de dudas, como la participación relevante de un

accionista principal a la cual alude la Secretaría de Comunicaciones como requisito para desechar una operación comercial como la que es objeto de estudio en esta causa.

Ante aquella situación de duda, cabe destacar que, de las presentaciones de los demandantes en estudio, no surgen elementos ni argumentos que permitan concluir que la citada resolución N° 148/10 sea nula o ilegítima, pues no basta para aquello inferir en forma dogmática y abstracta un presunto monopolio.

Por otra parte, cabe señalar que, como consecuencia de los compromisos asumidos por las partes directa e indirectamente involucradas y conforme lo resuelto por la Secretaría de Comunicaciones de la Nación (Resolución SC N° 136/2010, artículo 3), la figura del Operador prevista en el Pliego de Bases y Condiciones, Decreto 62/90 y sus modificatorias, fue dejada sin efecto respecto de TELECOM ARGENTINA S.A., razón por la cual TELECOM ITALIA S.A. dejó de ser el Operador de TELECOM ARGENTINA S.A.

43º) Que, de esta forma, si, en aquel marco, se agrega que, por la resolución impugnada, mediante la aceptación del compromiso propuesto por las sociedades demandadas, se establece una serie de limitaciones al accionar de la influencia de TELECOM ITALIA S.P.A. en TELECOM ARGENTINA S.A., aquella limitada incidencia accionaria de TELEFÓNICA S.A. en TELECOM ARGENTINA S.A., se limita aún más y hace necesario -se reitera- profundizar el estudio, en los hechos y en el desarrollo de la actividad de las entidades en juego, del funcionamiento del mercado de las telecomunicaciones para corroborar si, antes y, principalmente, después de puesta en marcha la metodología de la resolución N° 148/10 impugnada, el dominio monopólico denunciado en estos autos se verifica en la actualidad.

44º) Que, sentado, entonces, por lo expresado por los considerandos 36º a 43º de la presente, que existe un marco de serias

[Firma]
OSCAR ROCCA

RAFAEL CAPUTO
JUEZ

SÁNDRA VIVIANA GOMI
SECRETARIA

dudas acerca de si está realmente acreditado que TELEFÓNICA S.A. cuenta con un poder de acción, en los hechos, sobre TELECOM ARGENTINA S.A. por la sólo circunstancia de tener la participación accionaria que aquélla poseería en el paquete accionario de esta última, resulta razonable que, conforme surge de fs. 4/5 vta. de los autos principales, los cuestionamientos de las presentaciones en estudio a la operación investigada, giren en torno a la situación atinente al contexto real, fáctico y cotidiano de la toma de decisiones en el marco de TELECOM ARGENTINA S.A. y no a cómo aquellas decisiones se toman, en abstracto, en razón solamente de los porcentajes de participación en el capital de los diferentes dueños de la compañía, pues, en todo caso, de la lectura de la demanda no surge que el denunciado dominio monopólico se verifique en los hechos.

Así, a fs. 4, el denunciante indicó que por la resolución 4/09, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, expresó: *"existen elementos suficientes para encuadrar la operación dentro de las previsiones de obligación de notificación que trae aparejada el articulado de la Ley N° 25.156, tales como **el carácter de único operador técnico que TELEFÓNICA detenta sobre TELECOM ITALIA**, su conocimiento y participación sobre los mercados de telecomunicaciones nacional y extranjeros [y] **la posibilidad que la misma acceda a información no pública de su principal competidor en la República Argentina, TELECOM ARGENTINA, relacionada con la estrategia comercial, tecnológica y de negocios...**"* (el resaltado es de la presente).

Concordantemente, la Sala "A" de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, también hizo hincapié, a juicio de este juzgado, al poner énfasis en el carácter de único operador técnico de TELEFÓNICA S.A. con incidencia en TELECOM ARGENTINA S.A., en la trascendencia de la situación vinculada con el contexto real, fáctico y cotidiano de la toma de decisiones en el marco de TELECOM ARGENTINA S.A. En efecto, aquella Sala "A" (en la oportunidad en la cual se expidió en apelación con relación a las multas que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia aplicó en razón de la

USO OFICIAL

imputada notificación tardía de la operación en los términos del art. 8 de la ley 25.156) expresó: "...El hecho de que Telefónica S.A. sea titular de la mayor participación accionaria, de un 42,3% en la entidad adquirente, Telco, en la que se adoptan decisiones por simple mayoría, **unido a la circunstancia de ser la única de los integrantes del consorcio que se dedica al negocio de las telecomunicaciones, así como la existencia de estipulaciones en el contrato entre ellos tendientes a controlar el ingreso de otros accionistas con esa condición,** respaldan la apreciación de que la transacción celebrada implicó, de alguna manera, una influencia que cabe calificar de sustancial a los fines de tenerla como constitutiva de lo que la ley considera concentración económica (artículo 6 mencionado)..." (confr. Reg. N° 15/11 de la Sala "A" -el resaltado es de la presente y, por lo resaltado se pretende destacar la relevancia otorgada por aquella Sala a una situación operativa del funcionamiento real de las sociedades involucradas [carácter de único operador en telecomunicaciones de TELEFÓNICA S.A.] como factor determinante para tener por verificada, en principio, la incidencia de aquella sociedad en TELECOM ARGENTINA S.A.-).

45º) Que, con relación a la situación planteada por el considerando anterior, corresponde destacar, en primer lugar que, por lo menos por el contenido de los escritos por los cuales se plantearon las acciones en estudio y por el contenido de la resolución N° 148/10 atacada por aquellos escritos, no se indicó, ni se mencionó y, menos aún se probó, la existencia de algún caso concreto en el cual se haya demostrado la realización de algún acto específico en el desarrollo de la actividad de TELECOM ARGENTINA S.A. y/o de TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A., en forma separada o en forma conjunta, por el cual se demuestre una actuación corporativa que denote la existencia de una previa decisión tomada en forma unificada actuando ambas sociedades como grupo.

Tampoco se indicó, y menos aún se probó, algún caso específico que demuestre que los directivos de TELEFÓNICA S.A.

[Firma]
Cecilia Rocca

RAFAEL CARLITO
JUEZ

SANDRA VILIANA GOMI
SECRETARIA

hayan tenido acceso a información sensible y estratégica de TELECOM ARGENTINA S.A. obtenida a partir del presunto poder accionario de TELEFÓNICA S.A. sobre el capital de TELECOM ARGENTINA S.A.

La situación expresada por los dos párrafos anteriores es una muestra más del déficit que ostentan las demandas y de la necesidad de que la discusión se amplíe, no solo para escuchar concretamente a las restantes partes intervinientes, sino, especialmente, para poder desarrollar las medidas de prueba necesarias que avalen o descarten los términos de las acciones que motivaron esta instancia, en cuanto por aquéllas se indica que en el seno de las sociedades denunciadas se toman decisiones internas de tipo corporativo para afectar el desarrollo de la libre competencia en el mercado de las telecomunicaciones, o bien que las sociedades denunciadas como controlantes manejan indebidamente información sensible de las sociedades denunciadas como controladas. Máxime cuando, como ya fue expresado, las presuntas decisiones concentradas no han sido alegadas en concreto.

46º) Que, si bien por la resolución 4/09, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia entendió que en la operación comercial en estudio se verificaría un caso de concentración económica en los términos del art. 6 de la ley 25.156, lo cierto es que, por aquella decisión (obrante a fs. 3585/3734 de la Diligencia Preliminar 29, Expediente S01: 0147971/07 –en copia reservado por secretaría–), no se indicó con precisión ni con detalle alguna situación u operación concreta en el mercado de las telecomunicaciones que haya implicado una muestra de que, mediante la toma de decisiones en el marco de las sociedades investigadas o el uso de información sensible de las sociedades que operan en el mercado argentino, el objetivo de aquella concentración sea el de *“...restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar un perjuicio para el interés económico general...”*, en los términos del art. 7 de aquella ley.



En aquel marco, corresponde destacar que, si bien la Sala "A" de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, por la ya citada resolución del Reg. N° 15/11, habría avalado la verificación de un caso de concentración económica (ver considerando 44° de la presente), también es cierto que aquel Superior en momento alguno tuvo por acreditado algún hecho concreto invocado por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia afectatorio de la competencia y derivado de alguna decisión o manejo de información en el seno de las sociedades controladas. Por el contrario, por la resolución del Reg. N° 268/10, aquella Sala "A" (por el voto de la mayoría), quitó relevancia a los efectos de la decisión N° 4/09 de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, al indicar que aquella resolución, dictada en los términos del art. 6 de la ley 25.156 constituye una notificación que *"... no tiene, en sí misma, otra consecuencia que la de permitir a la autoridad competente ejercitar las atribuciones de preservación de la competencia autorizando o no la concentración o sometiéndola a determinadas condiciones, lo que tiene que ser hecho por resolución fundada y está sujeto a revisión por la autoridad judicial de conformidad con lo previsto en los artículos 13 y 52 inciso c de la ley. Que esa fundamentación y su eventual revisión en sede judicial conciernen igualmente a la existencia de la concentración que origina la obligación de notificar. **La opinión que a ese respecto haya anticipado la repartición administrativa a la que únicamente le compete una intervención de mero trámite carece, por ende, de toda trascendencia...**"* (el resaltado es de la presente).

47º) Que, como consecuencia de lo expresado por el considerando anterior, se advierte que la decisión de estimar que la operación cuestionada implica un caso de concentración económica, no exime de la necesidad (no satisfecha por las demandas en estudio y que se viene afirmando por esta resolución) de discutir detenidamente y, especialmente, probar, que la decisiones que tomen los participantes de la operación cuestionada generará o ha generado la existencia de supuestos concretos que afecten el adecuado

Coatita Rocca


RAFAEL CAPUTO
JUEZ


SANDRA VIVIANA GONZÁLEZ
SECRETARIA

funcionamiento de la competencia en el mercado de las telecomunicaciones en Argentina.

Lo expresado es así, pues aquella decisión dictada en los términos del art. 6 de la ley 25.156 "...carece...de toda trascendencia..." y sólo constituye el punto de partida para que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia desarrolle el pertinente procedimiento y se expida, como lo hizo mediante la resolución atacada N° 148/10, en los términos del art. 13 de la ley 25.156, por una resolución fundada, por cuya lectura, en este caso en particular, tampoco se despeja la necesidad de intensificar la discusión dogmática y la producción probatoria atinente, con relación a la verificación de supuestos concretos de afectación de la competencia. Máxime si -se reitera nuevamente- mediante la resolución atacada se aceptó un compromiso de las partes involucradas para evitar aquel tipo de conductas lesivas de la competencia en el mercado argentino de las telecomunicaciones, cuyo cumplimiento o incumplimiento o cuyo éxito o fracaso, como se verá, deberá ser también materia de discusión y prueba, pues no ha sido materia de demostración por las demandas en trato.

Nótese que, una vez afirmada la idea de la existencia de un caso de concentración económica en los términos del art. 6 de la ley 25.156 y desarrollado el procedimiento que se inicia con la notificación de aquella concentración en los términos del art. 8 de aquella ley, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia tiene, como una de las alternativas válidas en los términos del art. 13 de la ley mencionada, la de aprobar la operación cuestionada, lo cual es una prueba evidente de que, para la interpretación armónica de la propia ley 25.156, la declaración de la existencia de una concentración económica, no implica, de por sí, que aquella concentración sea lesiva de la competencia en el mercado como para ser desaprobada.

48°) Que, siguiendo con el razonamiento esbozado por los considerandos 44° a 47° de la presente, si se advierte que el problema se vincula con las modalidades de desarrollo de las actividades



concretas y de la toma de decisiones cotidianas y particulares de las sociedades involucradas (pues en aquel contexto es que TELEFÓNICA S.A. podrá tener un dominio técnico sobre las actividades de TELECOM ARGENTINA S.A. y/o un conocimiento estratégico de las políticas que trazan los lineamientos del trabajo cotidiano de la actividad de la sociedad que opera en Argentina), es posible afirmar que la decisión cuestionada por el demandante (resolución N° 148/10), por la cual se establecieron limitaciones a aquel funcionamiento cotidiano con relación al mecanismo de toma de decisiones y de la influencia en aquella toma de decisiones de los representantes, directos o indirectos, de TELEFÓNICA S.A., no resulta manifiestamente descabellada, pues tendería, precisamente, a evitar aquella incidencia material de esta última sociedad española en los aspectos técnicos y operativos y en el conocimiento estratégico de las políticas de la sociedad denunciada como controlada, que funciona en este país.

De esta forma, nuevamente, se advierte la necesidad de que aquel mecanismo impuesto por la resolución cuestionada sea testeado en el tiempo y en la realidad del funcionamiento de la actividad de las sociedades involucradas, a los fines de determinar si aquel mecanismo logró o no logró sus objetivos, toda vez que, de haberlos logrado, la incidencia negativa de la operación comercial cuestionada (relacionada, se reitera con el funcionamiento operativo cotidiano en el cual se toman aquellas decisiones con las limitaciones impuestas por la resolución en crisis) estaría soslayada, máxime si no se prueba (como sucede hasta el presente, no obstante las demandas en estudio) algún hecho concreto de actividad concentrada lesiva de la competencia en el mercado argentino de las telecomunicaciones.

Cabe destacar -se reitera- que por las demandas que motivaron esta causa no se alegó que el compromiso asumido y receptado por las autoridades haya sido incumplido, y que aquel compromiso, *prima facie*, resulta razonable a los fines de cumplir con el objetivo buscado, que es (conforme se expresó por el Dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia N° 835/10 ya

USO OFICIAL

RAFAEL LAPITO
JUEZ

SANDRA VIVIANA BONI
SECRETARIA

citado) garantizar la independencia de TELECOM ARGENTINA S.A. y TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. y sus respectivas controladas como competidores en los distintos mercados relevantes analizados por las autoridades.

49°) Que, en aquel sentido, por la lectura de diferentes pronunciamientos de la Sala "A" de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, relativos a la tramitación de lo actuado por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia en los términos de los arts. 6, 8 y 13 de la ley 25.156, con relación a la operación comercial en estudio, se advierte que, a juicio respetuoso de este juzgado, para aquella Sala "A", el compromiso que se aprobó por la resolución N° 148/10 de la Secretaría de Política Económica, no sería una solución manifiestamente desacertada para evitar los efectos nocivos que la operación comercial cuestionada podría generar en el mercado de las telecomunicaciones en Argentina.

Así, nótese que, por el considerando 16 del voto de la mayoría de la Sala "A" de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, correspondiente a la resolución del Reg. N° 10/10, se dijo: "...Que, por otra parte, surge de manera igualmente evidente **la total desvinculación de los considerandos de la resolución** [se refiere a la resolución 483/09 de la Secretaría de Comercio Interior, por la cual se ordenó la desinversión de la compra de acciones efectuada en el marco de la operación cuestionada], *lo mismo que los del dictamen que le sirve de fundamento* [se refiere al dictamen N° 744/09 de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia], **con respecto a la determinación adoptada de imponer condiciones a cumplir por quien no fue parte de la transacción a la que se refieren esos considerandos. En ninguno de los once capítulos en que se divide el dictamen...se contiene alguna indicación del porqué del condicionamiento impuesto.** Las objeciones a la celebración de las transacciones que son materia de tratamiento de ninguna manera explican que se haya optado por hacer cargar con las consecuencias de esas objeciones a quien no fue parte del negocio. En ese aspecto,

por ende, y a pesar de la extensión del dictamen, **lo resuelto omite expresar los motivos en que se funda y pone de manifiesto una discrecionalidad poco menos que absoluta...**

De esta forma, se advierte que la mayoría de la Sala "A" actuante entendió que por la resolución 483/09, la autoridad administrativa no fundó adecuadamente el por qué de la solución que por aquella resolución se dispuso, esto es, la desinversión por parte de la entidad cuyas acciones fueron objeto de adquisición por TELCO (TELECOM ITALIA S.P.A. y TELECOM ITALIA INTERNATIONAL N.V.) de su participación indirecta en la sociedad argentina TELECOM ARGENTINA S.A.

De esta forma, ante aquella falta de fundamentación de aquella solución, la adoptada por la nueva resolución ahora en estudio (N° 148/10), esto es, la aceptación del compromiso ofrecido por las partes demandadas en esta causa, no debe entenderse (atento a que se trata de una alternativa a aquella anterior decisión administrativa, infundada a juicio del Superior), como una solución manifiestamente descabellada del conflicto planteado.

50º) Que, concordantemente, por el voto de la minoría de la Sala "A" actuante, expresado por aquel mismo pronunciamiento registrado bajo el N° 10/10, se expresó: "...Algunos apelantes sostienen, pero no explican ni desarrollan, que la S.C.I. podría haber ordenado una medida anti-competitiva menos gravosa que la desinversión. Conforme los precedentes internacionales y nacionales que se han tenido en cuenta, no existiría otro medio idóneo que la desinversión para evitar el concreto y potencial riesgo competitivo. Sólo hubiera sido conveniente, tal como ocurrió en los antecedentes argentinos citados, que las empresas vinculadas en la operación TELCO hubieran transformado sus limitaciones contractuales en un 'compromiso' formal, conforme lo previsto por el art. 36 de la ley 25.156. Con ello se hubiera evitado el desgaste jurisdiccional administrativo y judicial que hoy toca a este Tribunal resolver..." (el resaltado es de la presente).

[Firma]
CARLOS ROCA

~~DAFAEL CAPUTO~~
JUEZ

SANDRA VIVIANA GONZ
SECRETARIA

De esta forma, por lo expresado por el párrafo anterior, se advierte que, en la opinión del voto de la minoría parcialmente transcripto, si bien la autolimitación que acompañó a la operación comercial cuestionada, por parte de las sociedades demandadas, en lo atinente a la toma de decisiones y manejo de información en el seno de las sociedades que operan en Argentina, no fue una solución adecuada para evitar los riesgos competitivos, sí lo sería la asunción de un compromiso formal en aquel sentido, con intervención de la autoridad administrativa. En un mismo sentido se puede interpretar lo expresado por todos los integrantes de aquella Sala "A" en la resolución del Registro N° 15/11: *"...Que, en el caso argentino, el mercado de las telecomunicaciones se encuentra limitado a, prácticamente, sólo dos operadores, Telefónica y Telecom y, si bien es cierto, como afirman las apelantes, que existen estipulaciones en los acuerdos celebrados tendientes a establecer la independencia de uno y otro operador y a impedir que la participación adquirida confiera ingerencia en decisiones estratégicas, las mismas no alcanzan a conjurar el riesgo de afectación a la competencia y al interés de los consumidores. **Se trata de acuerdos celebrados entre particulares y dependen de la voluntad de los contratantes que bien podrían dejarlos sin efecto. Únicamente adquirirían alguna eficacia esas estipulaciones a partir de la intervención de la autoridad que pueda controlar su cumplimiento y establecerlas como condición de la autorización acordada...**"* (el resaltado y el subrayado son de la presente).

En aquel marco, si se tiene en consideración que, precisamente, aquel compromiso, con el pertinente control de la autoridad administrativa acerca de su cumplimiento, es la estructura central de la resolución ahora atacada N° 148/10, la aceptación de aquél no debe entenderse, a juicio respetuoso de este juzgado, como una solución manifiestamente desacertada para la opinión de los señores jueces integrantes de la Sala "A" de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.

51º) Que, en este contexto, por las presentaciones que dieron curso a esta acción, no se demostró el fracaso de aquel, por lo menos, no descabellado (ni para esta sede, ni, en opinión de este juzgado, para los jueces integrantes de la Sala "A" de este fuero), sistema de limitaciones establecido por la resolución atacada, lo cual es coherente, nuevamente en este caso, con la idea de que aquella falta de demostración requiere de una mayor discusión del tema y del desarrollo de instancias probatorias de análisis del real funcionamiento de las compañías en juego y de sus comportamientos en el mercado de las telecomunicaciones, a los fines de poder cuestionar o validar el sistema instaurado por la resolución N° 148/10 que es objeto de ataque por las demandas que se tratan por esta resolución.

Se reitera, el compromiso ofrecido por las partes y aceptado por la Secretaría de Política Económica, luce razonable a los fines de garantizar la independencia de TELECOM ARGENTINA S.A. y TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.; y, más allá de las meras afirmaciones dogmáticas, genéricas y abstractas, nada se expresa por las demandas que demuestre lo contrario.

52º) Que, una evidencia elocuente de lo que se sostuvo por el considerando anterior, se deriva del examen de lo indicado por los veedores actuantes según surge de la Resolución N° 4/09 de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ver fs. 4 vta./5 de estos autos principales).

En efecto, aquellos veedores hicieron hincapié en que "...la prueba colectada por los suscriptos demuestra claramente que los directores y funcionarios de TELECOM ARGENTINA consultan en forma constante y reiterada, por distintas cuestiones a TELECOM ITALIA, las principales decisiones que deben adoptar y, además en líneas generales, **no toman decisiones en contra de las directivas que desde TELECOM ITALIA les hacen llegar...** Así, también es de señalar, que resulta cierto y concreto, **que existe un flujo de información real y mensual hacia TELECOM ITALIA, así como presupuestaria...**".

[Firma]
Cecilia Rocca


RAFAEL CAPUTO
JUEZ


SANDRA VIVIANA GORI
SECRETARIA

De esta forma, se advierte que el problema [vinculado con que "...la operación presentaba al principal competidor (TELEFÓNICA DE ARGENTINA, subsidiaria de TELEFÓNICA S.A.) de TELECOM ARGENTINA S.A., ejerciendo su influencia sustancial y determinante en TELECOM ITALIA..." y, en consecuencia, en TELECOM ARGENTINA S.A. -ver fs. 5 vta. y, asimismo, segundo párrafo transcripto en forma textual a fs. 6 de la presente-] radica -se reitera- en la forma en que se toman las decisiones, o se fijan las políticas o se transmite la información estratégica, a partir del vínculo entre las diferentes sociedades involucradas, razón por la cual un control de aquel circuito de toma de decisiones, de flujo de información y de fijación de políticas empresarias (y el establecimiento de limitaciones en aquellos ámbitos -a lo cual apunta el compromiso aceptado por la resolución N° 148/10 cuestionada-) no resulta un mecanismo que deba ser descartado de antemano.

Nótese que, por la demanda no se describieron -se reitera- situaciones concretas que conduzcan a valorar como ineficaz, a los fines señalados, el compromiso aludido.

53°) Que, si bien es cierto que, por los escritos que motivaron esta acción, las partes accionantes describieron en qué consistió el compromiso presentado por "...las empresas involucradas en la concentración..." y que fue aceptado por la resolución impugnada; y, además, indicaron que aquel compromiso "...es totalmente inútil e insuficiente..." y "...no remedia los graves problemas de competencia que la propia CNDC afirma que causa la operación.."; lo cierto es que, más allá de las críticas relacionadas con la rapidez con la cual el compromiso fue aceptado y con la ausencia de fijación de un plazo de duración de aquel compromiso, ningún fundamento concreto se deslizó por las demandas por el cual se acredite que aquel compromiso está destinado al fracaso.

En aquel marco, -se reitera nuevamente- no fue demostrado por las presentaciones en estudio que el contenido del compromiso sea manifiestamente incompatible con el objetivo de

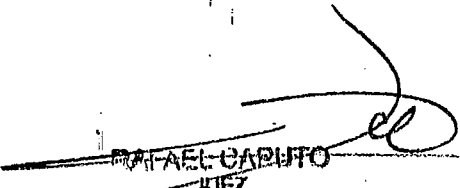
"...asegurar la separación e independencia de las actividades en el mercado argentino de las firmas TELEFÓNICA S.A. y sus controladas, por un lado, y de las firmas TELECOM ITALIA S.P.A., TELECOM ITALIA INTERNATIONAL N.V., SOFORA TELECOMUNICACIONES S.A., NORTEL INVERSORA S.A., TELECOM ARGENTINA S.A. y TELECOM PERSONAL S.A., por otro lado, preservando e incentivando las condiciones de competencia de las actividades de las mismas en el mercado argentino..." (ver fs. 24/24 vta. de estos autos principales y fs. 11264 y 11758 -parágrafo 2553- del Expte. 741, reservado por secretaría -en copia-).

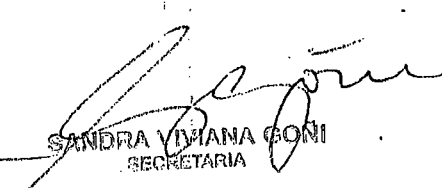
Lo expresado por el párrafo anterior se sustenta en que no parecen, en principio, ser medidas inadecuadas para evitar una intromisión de TELEFÓNICA S.A. en la toma de decisiones y en la fijación de políticas empresariales de TELECOM ARGENTINA S.A., la prohibición impuesta a aquélla de participar, votar o vetar (en el seno de las diferentes sociedades por las cuales TELEFÓNICA S.A. se vincula, directa o indirectamente, con TELECOM ARGENTINA S.A.) "...en cualquier cuestión relacionada con esas sociedades respecto de sus actividades en el mercado argentino...", como así también la prohibición impuesta a TELEFÓNICA S.A. de "...nombrar a cualquier miembro de directorio, gerente o miembro de organismo de control de las sociedades controladas por TELECOM ITALIA S.P.A. que participen del mercado argentino..." (ver fs. 24 vta. de estos autos principales y fs. 11762 -parágrafo 2580- hasta fs. 11782 del Expte. 741, reservado por secretaría -en copia-).

Tampoco parecen estar, por lo menos en abstracto, desconectas del objeto de evitar que TELEFÓNICA S.A. conozca información sensible de TELECOM ARGENTINA S.A., las medidas previstas en el compromiso aprobado por la resolución cuestionada, consistentes en que "...Telefónica presentará un compromiso de los directores, gerentes y cualquier funcionario de TELCO S.P.A., TELECOM ITALIA S.P.A. designado por ella, **mediante el cual se obligarán a no deliberar ni participar en las discusiones vinculadas a actividades en el mercado argentino...**" (ver fs. 25 de

USO OFICIAL

[Firma]
GZLW 2000


RAFAEL CAPUTO
JUEZ


SANDRA VIVIANA CONI
SECRETARIA

estos autos principales y fs. 11762 -parágrafo 2580- hasta fs. 11782 del Expte. 741, reservado por secretaría -en copia-; el resaltado es de la presente); y en que: "...las partes reconocen que **el intercambio de información confidencial o estratégica está prohibido** y los miembros del directorio de TELECOM ITALIA S.P.A. designados por TELEFÓNICA S.A. **asumirán el compromiso de no requerir información sobre las actividades en Argentina...**" (ver fs. 25 de estos autos principales y fs. 11762 -parágrafo 2580- hasta fs. 11782 del Expte. 741, reservado por secretaría -en copia-; el resaltado es de esta resolución).

54º) Que, de esta forma, si, *a priori*, los términos del compromiso aceptado por la resolución atacada, no son incompatibles en forma manifiesta con el objetivo propuesto, el cual, por su parte, pretende evitar la generación de prácticas anticompetitivas, y a lo expresado se suma que las partes demandantes no demostraron las razones concretas por las cuales aquel compromiso no tiene aquella compatibilidad, no es posible dar por sentado por esta resolución (y tomar alguna decisión en consecuencia) que aquel compromiso es inadecuado y que, en consecuencia, la resolución que lo acepta es nula y/o ilegítima.

Máxime si, además de lo expresado, el compromiso incluye el control de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia acerca de su cumplimiento (y el establecimiento de sanciones para el caso de incumplimiento) y la capacitación del personal jerárquico involucrado a los fines de la efectivización del compromiso; y fue, por otra parte, avalado por la Secretaría de Comunicaciones y por la Comisión Nacional de Comunicaciones, en tanto organismos expertos en el tema de las telecomunicaciones con el cual se vincula el mercado en el cual el compromiso pretende evitar las prácticas monopólicas (ver fs. 11338 y fs. 11762 -parágrafo 2580- hasta fs. 11782 del Expte. 741, reservado por secretaría -en copia-).

55º) Que, la conclusión sobre la compatibilidad *a priori* del compromiso con el objetivo de evitar comportamientos monopólicos, se corrobora si a todo lo expresado se suma -se reitera nuevamente- que a partir de la circunstancia consistente en que TELEFÓNICA S.A. tendría solo el control indirecto de menos del 3% del capital de TELECOM ARGENTINA S.A., las demandantes no demostraron que aquel porcentaje de dominio pueda producir con "...elevadísimos...riesgos..." (fs. 40 de los autos principales) y de por sí, el control de toda la actividad de TELECOM ARGENTINA S.A. por parte de TELEFÓNICA S.A., como para poder desarrollar políticas monopólicas con la intervención de TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. en tanto principal competidor de TELECOM ARGENTINA S.A.

56º) Que, a partir de lo expresado, sólo mediante el desarrollo de una mayor discusión del tema y, particularmente, a partir de la producción de las medidas probatorias adecuadas que resulten conducentes para verificar si el compromiso se ha cumplido o no se ha cumplido desde su asunción al presente; y/o si el compromiso ha logrado o no ha logrado sus objetivos, y/o si el porcentaje que TELEFÓNICA S.A. detenta en el capital de TELECOM ARGENTINA S.A. implica, de por sí, un control de esta última con fines monopólicos, se podrá arribar a una conclusión adecuada sobre la legalidad o ilegalidad de la resolución atacada.

Una constancia evidente de aquella necesidad de mayor discusión probatoria se advierte por la lectura del parágrafo 2583 del dictamen N° 835/10 adjunto a la resolución atacada N° 148/10 (ver fs. 11763 del Expte. 741). En efecto, en aquella oportunidad, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia estimó necesario, como una pauta para analizar el devenir del funcionamiento del compromiso como una forma de evitar conductas anticompetitivas, el examen y "...control permanente y exhaustivo de las variables relevantes en los mercados analizados...", esto es, "...la participación de mercado de las empresas involucradas, base de clientes, nuevos municipios cubiertos por las empresas, gastos de publicidad y precios de los

USO OFICIAL

[Firma]
Cecilia Rocca

RAFAEL CAPUTO
JUEZ

SANDRA VIVIANA BONI
SECRETARIA

servicios prestados...". En este marco, si se advierte la consecuente necesidad de examinar aquellos parámetros para poder determinar si el compromiso aceptado y, en consecuencia, la resolución atacada que lo acepta, son o no son ilegales o nulos, es posible advertir, también y sin dificultad, la abrumadora necesidad de profundizar la producción y examen probatorios, a los fines de poder tomar una decisión conforme a derecho, sobre aquellas validez o nulidades.

57º) Que, si bien las partes demandantes indicaron que *"...El compromiso aceptado es ilegal por apartarse de los criterios rectores en materia de defensa de la competencia..."* (ver, por ejemplo, fs. 39 y siguientes de estos autos principales), lo cierto es que lo expresado bajo aquel acápite del escrito de fs. 1 ter /50, no pasa de ser una mera argumentación abstracta sobre aquellos criterios, sin una demostración específica, sobre la base de las pertinentes evidencias probatorias empíricas del caso concreto, de por qué el compromiso en estudio afecta aquellos principios.

En efecto, si no fue aportado ningún elemento probatorio relativo a un seguimiento en el tiempo del funcionamiento en los hechos del compromiso aceptado por la resolución impugnada, no es posible afirmar, como lo hacen las partes demandantes, que la solución propuesta no está siendo ejecutada plenamente, o que el cumplimiento del compromiso no está siendo supervisado, o que aquel compromiso ha fracasado pues ha generado una limitación concreta y probada de la libre competencia efectiva en el mercado.

Si bien es cierto que las decisiones que las sociedades involucradas con sede en el extranjero tomen con relación a aquellas que funcionan en el mercado argentino, pueden ser informales y no reflejarse en las controlables actas de asambleas o de directorio, también lo es que aquella mala fe en el cumplimiento del compromiso no puede presumirse y es necesario el aporte (no existente en las presentaciones en estudio) de pruebas concretas de la verificación de aquellas decisiones informales tomadas ya en el marco del funcionamiento del compromiso asumido, como así también de la

influencia específica de aquellas eventuales decisiones informales en uno más casos concretos de efectos monopólicos específicos y precisamente definidos en el tiempo y en el espacio del mercado argentino.

Por otra parte, por la sola circunstancia consistente en que, por el compromiso, se hayan previsto sanciones para el caso de que alguna de las pautas de aquel pacto no se cumplan, no se deriva como consecuencia jurídica necesaria que aquellas sanciones reemplacen a la vinculada con la denegatoria de la autorización de la operación en cuestión, toda vez que esta última consecuencia, como bien lo señalan las partes demandantes, deriva de la ley, la cual no puede ser modificada por ningún compromiso aprobado por una resolución de rango inferior a las disposiciones emanadas del poder legislativo nacional.

Por otra parte, por la propia resolución atacada (confrontar su artículo 6º -fs. 11268 del Expte. 741, reservado en copia por secretaría-), se estipuló que el incumplimiento del compromiso implica "...la resolución inmediata de lo prescripto por el artículo 5º de la presente..." el cual, precisamente, es el que acepta el compromiso ofrecido por las partes. Además, por la lectura del párrafo 2594 de fs. 11765 del Expte. 741, se advierte que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, expresamente dejó sentado que el compromiso, en nada limita sus facultades de control, cautelares y sancionatorias previstas por el art. 24 de la ley 25.156 (ver incisos a), b), d), k) y m) de aquel artículo).

En aquel marco, aquellas sanciones *extras* establecidas por el compromiso, más que constituir un elemento favorecedor de alguna conducta monopólica, funciona como un incentivo más (al ser una consecuencia negativa adicional a la prevista por la ley, ante el incumplimiento de lo comprometido) para cumplir con lo pactado y no afectar la competencia en el mercado argentino de las telecomunicaciones.


CECILIA ROCCA


RAFAEL CAPUTO
JUEZ


SANDRA VIVIANA GOÑI
SECRETARIA

58º) Que, por las presentaciones en estudio, se hizo hincapié en que una de las causales por las cuales se supone que el compromiso fue inadecuadamente aceptado, es porque aquel compromiso presupone, erróneamente a juicio de las partes accionantes, que TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. y TELECOM ARGENTINA S.A. tienen incentivos para competir.

Aquel argumento se sustenta en la idea de que aquella falta de incentivo para competir *"...responde, adicionalmente, a la forma en que se privatizó ENTEL. En dicha privatización, tanto a TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. como a TELECOM ARGENTINA S.A. se les concedió un monopolio por más de siete años en la zona Sur y Norte del país, respectivamente. Esta circunstancia determinó una segmentación geográfica del mercado que se mantiene hasta la actualidad..."*.

En el marco señalado por el párrafo anterior, se advierte que la parte demandante pretende probar aquel sustento de la falta de incentivo para competir, con la mera mención de un párrafo de una declaración testimonial (ver fs. 41 vta./2 de los autos principales), lo cual, en principio, resulta inadecuado si se tiene en cuenta que se trata de una situación que se habría desarrollado a lo largo de más de 20 años.

De esta forma, se advierte una nueva situación de déficit de sustento probatorio que debe ser subsanado mediante el desarrollo de la pertinente actividad de discusión y de producción de pruebas que no se verifica en el marco de estas actuaciones, a los fines de probar aquella falta de incentivo para la competencia derivada de la privatización de ENTEL y, acrecentada, según los términos de la demanda, por la operación comercial cuestionada. Recién a partir de que aquellos extremos estén probados, también deberá discutirse ampliamente y probarse, que el compromiso aprobado por la resolución cuestionada no haya sido eficiente para desvirtuar aquella supuesta falta de incentivo para competir alegada. Adicionalmente, la presunta y no demostrada falta de incentivo para competir no sería consecuencia de la resolución impugnada, sino que sería una

situación pre-existente que de ninguna manera se ha acreditado por la demanda.

59°) Que, por la lectura de los párrafos 2618 (fs. 11788) a 2675 (fs. 11798) y del anexo I de la parte dispositiva, del dictamen 835/10 (fs. 11809/11810); y del punto 7° de la parte dispositiva de la resolución 148/10 (fs. 11268) (todas aquellas fojas corresponden al Expte. 741 que -en copia- obra reservado por secretaría), se advierte que, a instancias de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y como complemento del compromiso aceptado, por la resolución atacada, se efectuaron una serie de recomendaciones pro competitivas que el Estado Nacional debe cumplir, dirigidas a la Secretaría de Comunicaciones del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

En este contexto, por las presentaciones de las partes accionantes ninguna evidencia se aportó acerca de si aquellas recomendaciones fueron o no fueron cumplidas. De esta forma, si se atiende a que el cumplimiento de aquellas recomendaciones habrían tenido como objeto complementar el compromiso aceptado por la resolución atacada, nuevamente en este caso, resulta necesario, para analizar el éxito o el fracaso de aquel compromiso en su afán de evitar conductas anticompetitivas (y en consecuencia, para analizar la validez o invalidez de la resolución atacada que aceptó aquel compromiso), efectuar mayores discusiones y, particularmente, producir una mayor cantidad de pruebas acerca de si aquellas recomendaciones fueron o no fueron cumplidas por las autoridades exhortadas a hacerlo.

60º) Que, más allá de lo expresado hasta el presente por esta resolución, corresponde efectuar la siguiente consideración.

A partir de fs. 8 y hasta fs. 14, y, posteriormente, desde fs. 17 y hasta fs. 23, y a fs. 47 vta./48 vta., una de las partes accionantes, por remisión a lo establecido por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia mediante el dictamen 744/09, describió una serie de

a serie de

[Signature]

CECILIA ROOS

RAFAEL CAPUTO
JUEZ

SANDRA VIVIANA BONI
SECRETARIA

efectos que, en el mercado de las telecomunicaciones, tendría, a partir de la operación comercial cuestionada, la actuación denunciada como monopólica de TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. y TELECOM ARGENTINA S.A. como un grupo unificado.

Se hizo referencia, en aquel sentido, a la Influencia que, según aquella parte accionante, la operación cuestionada tendría en el mercado de telefonía fija, en el mercado de acceso a la *internet*, en el mercado de telefonía de larga distancia nacional e internacional, en la conformación de un mercado convergente de servicios referenciales, en el mercado de servicios minoristas corporativos, en el mercado del servicio de telefonía pública, en el mercado de telefonía móvil, en los mercados mayorista y minorista de telecomunicaciones y en la generación de barreras *"a la entrada en los mercados de mayoristas o de infraestructura (acceso mayorista a Internet, transporte y acceso local)"* y de barreras *"...a la entrada en los mercados minoristas (Telefonía fija local, Telefonía de Larga Distancia Nacional e Internacional, Telefonía móvil, Acceso a Internet Minorista y Servicios de Telecomunicaciones al sector Corporativo). Ganancias de eficiencia"*.

No obstante, este juzgado entiende que, por más detalles que se aporten acerca de los efectos que tendría la actuación monopólica denunciada, lo cierto es que, por el examen de los efectos, no es posible probar la causa de aquellos supuestos efectos que se alega, esto es, que la participación accionaria que directa o indirectamente tendría TELEFÓNICA S.A. (y, en consecuencia, TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.) en TELECOM ARGENTINA S.A., genera un dominio por parte de aquella sociedad extranjera sobre las decisiones operativas y las políticas de acción de TELECOM ARGENTINA S.A. y/o un conocimiento por parte de TELEFÓNICA S.A. (y, en consecuencia, de TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.) de información sensible y estratégica de TELECOM ARGENTINA S.A.

Menos aún, en consecuencia, el estudio de aquellos efectos podrá probar la existencia de aquella causa, sin un examen, no efectuado por las acciones objeto de la presente, mediante el

desarrollo de las discusiones y pruebas no producidas aún, de la eficacia o el fracaso del funcionamiento del compromiso adoptado por la resolución N° 148/10 (cuestionada en estos autos) mediante el cual se pretendió limitar, con el pertinente control administrativo, el accionar de la/s sociedad/es denunciada/s como controlante/s, a los fines de evitar aquel control con efectos denunciados como monopólicos.

61º) Que, en aras de continuar con el examen de los diferentes argumentos de las presentaciones bajo examen, debe destacarse que no es posible estimar que la falta de determinación de un plazo específico y fijo para la duración del compromiso, transforme, por aquella sola circunstancia, a la resolución N° 148/10 que aceptó aquel compromiso, en un acto ilegítimo.

En efecto, el compromiso aceptado por la resolución impugnada constituye la condición a la cual se subordinó la operación económica objeto de aquella decisión y aquella imposición condicional está, en principio, legítimamente enmarcada en los términos del inciso b) del art. 13 de la ley 25.156, por el cual no se establece la obligación de la fijación de un plazo para el cumplimiento de las condiciones.

Si bien la fijación de aquel plazo se regula por el art. 13 del decreto reglamentario N° 89/2001, lo cierto es que debe entenderse que aquel plazo debe fijarse, en los casos en los cuales, por la naturaleza de la condición impuesta, aquella fijación resulta razonable.

En este contexto, se advierte que, en el *sub examine*, el compromiso implicó una limitación al accionar de las sociedades involucradas en la operación cuestionada en lo atinente a los mecanismos de toma de decisiones, fijación de políticas y manejo de la información interna y sensible de las sociedades que operan en el mercado argentino. Es por ello que una de las propias partes denunciantes, a fs. 33 de estos autos principales, menciona que por el numeral 2611 del dictamen N° 835/10 de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (antecedente de la resolución impugnada), se impuso que la duración del compromiso será mientras "...TELEFÓNICA S.A. siga manteniendo un interés directo o indirecto

USO OFICIAL
RECCS.


RAFAEL CAPUTO
JUEZ


SANDRA VIVIANA GONI
SECRETARIA

en TELECOM ITALIA S.P.A. y mantenga derechos societarios similares a los previstos por los documentos contractuales acompañados al Expediente...relativo a la operación Telco, y, al mismo tiempo, un interés directo o indirecto en compañías con actividades en el mercado argentino...”.

De esta forma, se advierte que no se trata de que se cumpla un determinado requisito, a partir de cuyo cumplimiento, se revertirá una situación que se estima inadecuada para el funcionamiento del mercado que está en juego en la resolución en crisis, sino que, por el contrario, los requisitos establecidos en el compromiso, aprobado por la resolución atacada significan una reformulación de las condiciones de la operación comercial (en lo atinente a la forma en que se tomarán las decisiones y se manejará la información sensible) que, por lo tanto, deben mantenerse mientras los efectos de la operación comercial permanezcan.

Se verifica así un caso en el cual no es racionalmente posible la fijación de un plazo fijo para el cumplimiento de una condición, sino que aquel plazo será el que corresponda a la permanencia de la vigencia del vínculo accionario entre las sociedades involucradas, que la operación cuestionada implica.

62º) Que, en aras de continuar con el examen de los diferentes argumentos de las presentaciones bajo examen, debe destacarse que este juzgado entiende que la operación cuestionada ya no puede entenderse sólo en los términos del juego de participaciones accionarias de unas sociedades en otras, sino que la operación en sí misma está integrada, además, por el compromiso aprobado por la resolución cuestionada.

En aquel marco, conforme ya se indicó por la presente, por las demandas en estudio, no se expresaron los motivos, ni se indicaron las evidencias probatorias, por las cuales debe entenderse que la operación más las condiciones del compromiso, haya generado los efectos monopólicos sobre el mercado que tantas veces las partes

demandantes pusieron de manifiesto, por ejemplo, por la presentación de fs. 1 ter/50.

En aquel contexto, nada impide que, si, desarrollada la mayor discusión sobre el tema que esta sede estima necesaria, y producida y examinada la prueba que, a juicio de esta sede, debe desarrollarse, se comprueba que el compromiso, en tanto condición adicionada a los términos accionarios de la operación, no fue cumplido o no fue exitoso, el organismo administrativo actuante analice nuevamente la situación en aquellas nuevas condiciones de discusión y probatorias, para determinar las medidas a adoptar.

PERO ello resultará procedente —se reitera— de haberse demostrado en concreto que el compromiso ha sido incumplido o no ha resultado exitoso. De la demanda no surge que el compromiso haya sido incumplido y tampoco que sea inútil a los fines de cumplir su cometido, por lo que la aprobación de la operación (que fue una aprobación condicionada) y el compromiso devienen en principio legítimos; sin perjuicio del derecho de los terceros de objetar conductas monopólicas concretas o nuevas situaciones que permitan, eventualmente, adoptar otra decisión que, con los elementos expuestos por la demanda, no resulta, por el momento, procedente.

63º) Que, en aras de continuar con el examen de los diferentes argumentos de las presentaciones bajo examen, debe destacarse que por los razonamientos efectuados por este juzgado por los considerandos 48º a 57º de la presente, se entendió que la aprobación del compromiso presentado por las partes involucradas, no aparece como una solución manifiestamente ilegal, descabellada o irracional frente a los problemas que podrían derivarse en el caso de que logre acreditarse la influencia de TELEFÓNICA S.A. sobre las decisiones de TELECOM ARGENTINA S.A. derivada de la no probada como significativa participación accionaria de aquella sobre ésta.

En aquel marco, aquella falta de evidencia (con la consecuente necesidad de una mayor discusión dogmática y probatoria), de una manifiesta inadecuación a derecho de la resolución

[Firma]
CARLOS ROLDÁN

USO OFICIAL

RAFAEL CARRILLO
JUEZ

SANDRA VIVIANA GONZÁLEZ
SECRETARIA

148/2010, impide entender que esta última resolución se encuentra manifiestamente infundada, máxime si -se reitera- las propias partes demandantes, no han demostrado el fracaso del compromiso en lo atinente al cumplimiento de sus objetivos de protección de la competencia, y han reconocido que no es improcedente imponer *"...este tipo de remedio..."*, cuando *"...se pueden corregir los problemas de competencia con remedios más económicos [que una obligación de desinversión] como compromisos o subordinaciones..."* (fs. 46 vta. de estos autos principales).

Por otra parte, no es posible suponer que la resolución 148/2010 es contradictoria con la anterior decisión tomada por la Secretaría de Industria y Comercio (y anulada por la Sala "A" de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo penal Económico -ver resolución N° 483/09 de la Secretaría de Comercio Interior y Reg. N° 10/10 de aquella Sala "A"-), toda vez que, entre el dictado de la primera resolución y aquella que ahora es objeto de estudio, se verificó la aparición de un elemento (la propuesta del compromiso luego aprobado) que generó que las condiciones en las cuales se dictaron una y otra resolución, hayan sido diferentes, lo cual no transforma en irracionalmente contradictorias a las dos decisiones diferentes, que se tomaron en cada caso.

64°) Que, como consecuencia de lo expresado por los considerandos 36° a 63° de la presente, se advierte que, no se ha demostrado por las demandas en estudio que, en las condiciones actuales del presente legajo, resulte procedente anular la resolución impugnada; razón por la cual, a los fines de estimar nula o ilegal a la resolución N° 148/2010 dictada por la Secretaría de Política Económica, resultaría necesario el desarrollo de una mayor precisión de datos concretos y una mayor discusión de naturaleza dogmática, con la consecuente intervención de todos los actores interesados e involucrados en la operación comercial a la cual aquella resolución se refiere. Además, por la lectura de aquellos considerandos se advierte que a aquellos mismos fines, también se hace indispensable la

producción de un más amplio debate probatorio mediante la proposición y producción de las pruebas que resulten atinadas con relación a los diferentes tópicos que exigen una mayor discusión.

En efecto, a lo largo de esta decisión se ha puesto de manifiesto que, sin perjuicio de no haberse demostrado por las demandas que resulte procedente -en este momento- anular la resolución impugnada, en todo caso, para arribar a una solución diferente sería menester dilucidar los siguientes tópicos, necesarios para poder eventualmente adoptar alguna decisión diferente respecto de la operación, el compromiso y la resolución cuestionados:

A) resulta necesario profundizar la discusión y la prueba en lo atinente a si con la posesión indirecta de alrededor del 2,7 % del capital de TELECOM ARGENTINA S.A., TELEFÓNICA S.A. tiene el poder necesario como para poder determinar, o influir en, los designios de las políticas de TELECOM ARGENTINA S.A., de manera tal de que aquellos designios coincidan con los de TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. y se verifique, en consecuencia, la posibilidad del desarrollo de prácticas monopólicas entre ambas sociedades en el mercado argentino (ver considerandos 36º a 44º de la presente);

B) resulta necesario profundizar la discusión y la prueba en lo atinente a la realización de un examen profundo del funcionamiento real y en el tiempo y, en consecuencia, de la utilidad o de la eficacia del compromiso aprobado por la resolución 148/10 objeto de ataque de las presentes acciones (ver considerando 47º y 48º de la presente);

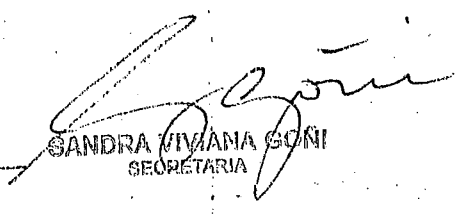
C) resulta necesario profundizar la discusión y la prueba en lo atinente a si en el seno de las sociedades denunciadas se toman decisiones internas de tipo corporativo para afectar el desarrollo de la libre competencia en el mercado de las telecomunicaciones en Argentina, y a si las sociedades denunciadas como controlantes manejan indebidamente información sensible de las sociedades denunciadas como controladas (ver considerandos 45º y 46º de la presente);

D) resulta necesario profundizar la discusión y la prueba en lo atinente a si es posible demostrar el fracaso del compromiso

USO OFICIAL

[Firma]
GILIA ROCA


RAFAEL CAPUTO
JUEZ


SANDRA VIVIANA GONI
SECRETARIA

aprobado por la resolución atacada, en lo relativo al sistema de limitaciones establecido por aquel compromiso (ver considerandos 51º, 54º y 56º de la presente);

E) resulta necesario profundizar la discusión y la prueba en lo atinente a si el compromiso aprobado por la resolución cuestionada se ha cumplido o no se ha cumplido desde su asunción al presente (ver considerando 56º de la presente);

F) resulta necesario profundizar la discusión y la prueba en lo atinente a si el compromiso aceptado por la resolución atacada, resulta violatorio de *los criterios rectores en materia de defensa de la competencia...* (ver considerando 57º de la presente);

G) resulta necesario profundizar la discusión y la prueba en lo atinente a si el compromiso aprobado no está siendo ejecutado plenamente, o a si el cumplimiento de aquel compromiso no está siendo debidamente supervisado (ver considerando 57º de la presente);

H) resulta necesario profundizar la discusión y la prueba en lo atinente a si existen evidencias concretas de la existencia de decisiones informales tomadas por las sociedades involucradas, ya en el marco del funcionamiento del compromiso asumido, como así también de la influencia específica de aquellas eventuales decisiones informales en uno más casos concretos de efectos monopólicos específicos y precisamente definidos en el tiempo y en el espacio del mercado argentino (ver considerandos 45º y 46º de la presente);

I) resulta necesario profundizar la discusión y la prueba en lo atinente a si realmente se verifica un supuesto de falta de incentivo para la competencia en cabeza de TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. y TELECOM ARGENTINA S.A., derivada de la privatización de ENTEL y, acrecentada, según los términos de las demandas, por la operación comercial cuestionada (ver considerando 58º de la presente);

J) resulta necesario profundizar la discusión y la prueba en lo atinente a si, aún en el caso de se compruebe la hipótesis aludida por el punto I) precedente, el compromiso aprobado por la resolución

cuestionada no ha sido eficiente para desvirtuar aquella supuesta falta de incentivo para competir alegada (ver considerando 58° de la presente);

K) resulta necesario profundizar la discusión y la prueba en lo atinente a si, en definitiva, se verifica una manifiesta inadecuación a derecho del mecanismo aprobado por la resolución 148/2010 cuestionada en estos autos;

L) resulta necesario profundizar la discusión y la prueba en lo atinente a si se ha dado cumplimiento a las recomendaciones pro competitivas que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia aconsejó llevar a cabo como mecanismo complementario del compromiso aprobado por la resolución atacada, a los fines de evitar prácticas anticompetitivas (ver considerando 59° de la presente).

65°) Que, más allá de la incuestionable razonabilidad de la conclusión obtenida por el considerando anterior a partir de los fundamentos desarrollados por la presente resolución, aquella necesidad de un mayor debate y de una mayor producción probatoria a los fines de determinar la ilicitud y/o invalidez de la resolución atacada por las partes demandantes, se reafirma con la lectura de las expresiones de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que a continuación se transcribirán, en cuanto por aquellas expresiones se reconoce la intrínseca necesidad de una amplia discusión argumental y probatoria en temas como el que es objeto de esta decisión.

Así, por el párrafo 1119 de fs. 11468 del Expte. 741, aquella comisión nacional indicó: *“...Claramente, el procedimiento para concluir que una conductas llevada a cabo por un agente del mercado afecta las condiciones de eficiencia **implica la producción de prueba y el desarrollo de un profundo análisis jurídico económico**...* (el resaltado es de la presente).

66°) Que, la circunstancia consistente en que por la demanda no se ha demostrado en forma suficiente (A) que resulte

USO OFICIAL
[Firma]
PSCGA

RAFAEL CAPUTO
JUEZ

SANDRA VIVIANA CONI
SECRETARIA

improcedente aprobar la operación cuestionada en forma condicionada, ni (B) que sea impertinente estimar adecuado el compromiso asumido por las partes involucradas, sumado al hecho de que, en todo caso, resultaría necesario el desarrollo de una mayor discusión y, particularmente, de la producción de un más amplio debate probatorio, con relación a los tópicos enumerados por el considerando 64° de la presente, son las causales por las cuales este juzgado entiende que debe rechazarse la acción de amparo objeto de este expediente.

Lo expresado por el párrafo anterior no implica una contradicción con la incuestionable razonabilidad de la postura de la Sala "A" de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico vertida a fs. 167/167 vta., en lo atinente a que, en el marco de la cuestión de competencia planteada según lo resuelto por la justicia en lo civil y comercial federal de esta ciudad (ver fs. 57/58 y 81/82), la acción interpuesta a fs. 1ter/50 y que es una parte del objeto de esta decisión debía tratarse, *a priori*, como una acción de amparo. En efecto, la postura de la Alzada obligó a este juzgado a dar a la presentación mencionada el trámite del amparo, en el marco del cual, la posibilidad de su rechazo por los motivos que se vienen expresando por la presente, es una de las alternativas sobre las cuales la Alzada, adecuadamente, no se expidió en ningún sentido.

67°) Que, por la demanda de fs. 1 ter/50, se expuso que "...[l]a Resolución viola el marco regulatorio y los pliegos de licitación de la privatización de ENTEL..." (ver, por ejemplo, fs. 42 vta./45 vta.) y que el informe de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación previo al dictado de la resolución impugnada sería contradictorio con un informe anterior.

Sin embargo, conforme surge del numeral 387 del Dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia N° 835/2010, en el cual se funda la resolución impugnada (ver Expte. 741): "...En esa ocasión el análisis regulatorio se efectuó teniendo en consideración la Resolución N° 4/2009 emitida por esa Comisión

Nacional de Defensa de la Competencia, por lo cual ese Organismo concluyó que la transacción en análisis implicó un cambio de control en Telecom Argentina S.A. y en la que se determinó que existía influencia sustancial suficiente que en principio, originaba la obligación de las empresas de notificar la operación en cuestión frente a las autoridades de competencia argentinas en los términos del artículo 8 de la Ley 25.186... En este sentido, si a juicio de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, el escenario originario se viera desvirtuado con la nueva estructura generada a partir del compromiso de conducta que evita el intercambio y el acceso a información sensible por parte de las empresas involucradas, sería posible inferir que esa Operación, en el nuevo contexto presentado y en tanto y en cuanto se cumpla con el compromiso, no conmovería ni afectaría el marco regulatorio".

USO OFICIAL

Por lo transcripto por el párrafo anterior, se advierte que el primer informe de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación se fundó en una circunstancia fáctica (una influencia sustancial suficiente de TELEFÓNICA S.A. en TELECOM ARGENTINA S.A. en opinión de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia), que luego fue desvirtuada como consecuencia del compromiso asumido y su aceptación por la autoridad de aplicación de la Ley 25.156.

68º) Que, en aquel contexto, signado por la verificación de un serio déficit en materia de discusión argumental y probatoria, corresponde destacar, conforme se insinuó por el primer párrafo del considerando 66º de la presente, que por el artículo 2 de la ley 16.986 se establece que una acción de amparo resulta inadmisibile cuando, entre otros casos, "**...la determinación de la eventual invalidez del acto requiere una mayor amplitud de debate o de prueba o la declaración de inconstitucionalidad de leyes, decretos u ordenanzas...**" (el resaltado es de la presente).

La normativa transcripta se deriva del carácter excepcional del remedio procesal que constituye el amparo y del carácter

[Firma]
G. R. R. R.

RAFAEL CAPUTO
JUEZ

SANDRA VIVIANA GONI
SECRETARIA

expeditivo y de limitado conocimiento del proceso que regula la ley 16.986.

69°) Que, en efecto, en aquel mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sostuvo, mediante sentencia de fecha 7 de mayo de 1998 recaída en el sumario "PRODELCO C/P.E.N. S/AMPARO", que **"...el amparo no resulta procedente cuando la cuestión sometida al conocimiento judicial requiere por su complejidad una amplitud de debate y prueba inconciliable con el trámite abreviado de este tipo de proceso ... Esta doctrina – elaborada ya antes de la sanción de la ley de amparo, y que mantuvo su vigencia para interpretarla– es igualmente aplicable con posterioridad a la consagración constitucional de este remedio excepcional (causa S.1067.XXXI. 'Servotron S.A.C.I.F.I. c/ Metrovías S.A. y otros s/ amparo – ley 16.698', pronunciamiento del 10 de diciembre de 1996). Conforme a esta tradicional doctrina, las cuestiones jurídicas opinables son ajenas al ámbito del amparo ya que requieren mayor amplitud de debate (Fallos: 248:837; 250:772; 252:64; 265:225; 274:324; 281:394). –el resaltado es de la presente–.**

70°) Que, si bien es cierto que, por la lectura de los arts. 7 a 11 de la ley 16.986, se regula la verificación de una instancia probatoria en el marco de un proceso de amparo, la magnitud (en cuanto a cantidad y trascendencia) de los puntos a dilucidar en este caso (ver considerandos 64° y 65° de la presente), impide desarrollar todo el bagaje probatorio pendiente en el marco acotado y expeditivo que, conforme se indicó por el considerando 68° de la presente, tiene la acción de amparo.

Téngase presente que el déficit probatorio verificado se vincula con la necesidad de analizar el funcionamiento real y cotidiano de, por lo menos, dos de las sociedades que operan en el mercado de las telecomunicaciones en todo el país y la influencia de aquel funcionamiento en la actividad de los restantes operadores de aquel mercado, lo cual implica un alcance temporal y espacial amplísimo y, por lo tanto, inabarcable en un proceso sumarísimo como el que se regula por la ley 16.986.

En este sentido, corresponde destacar, nuevamente y sólo a manera de un ejemplo de aquella complejidad y magnitud del trámite probatorio pendiente, lo expresado por el considerando 56° de la presente, en cuanto a que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia estimó necesario, como una pauta para analizar el devenir del funcionamiento del compromiso como una forma de evitar conductas anticompetitivas, el examen y *"...control permanente y exhaustivo de las variables relevantes en los mercados analizados..."*, esto es, *"...la participación de mercado de las empresas involucradas, base de clientes, nuevos municipios cubiertos por las empresas, gastos de publicidad y precios de los servicios prestados..."*.

En este marco -se reitera-, si se advierte la consecuente necesidad de examinar aquellos parámetros para poder determinar si el compromiso aceptado y, en consecuencia, la resolución atacada que lo acepta, son o no son ilegales o nulos, es posible advertir, también y sin dificultad, la abrumadora necesidad de profundizar la producción y examen probatorios, a los fines de poder tomar una decisión conforme a derecho, sobre aquellas validez o nulidades.

71º) Que, en el sentido indicado por el considerando anterior, se ha expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación:

J. Roca
JULIO ROCA

USO OFICIAL

RAFAEL CAPUTO
JUEZ

SANDRA VIVIANA GONZALEZ
SECRETARIA

"...Conforme a esta tradicional doctrina, las cuestiones jurídicas opinables **son ajenas al ámbito del amparo** ya que requieren mayor amplitud de debate (Fallos: 248:837; 250:772; 252:64; 265:225; 274:324; 281:394). **También lo son aquellas en las cuales se requiere prueba más extensa que la compatible con este procedimiento abreviado**, toda vez que pese a no ser este proceso excluyente de cuestiones que necesitan demostración, sí descarta aquellas cuya complejidad o difícil comprobación requiere de un aporte mayor de elementos de juicio de los que pueden producirse en el procedimiento previsto por la ley 16.968 (Fallos: 306:1253, 307:747, 1953, 2345)..." —el resaltado es de la presente—.

72º) Que, sin perjuicio de la improcedencia del amparo y como un fundamento más de aquella improcedencia, nada obsta a la parte actora a que recurra al procedimiento regulado por los arts. 26 y siguientes de la ley 25.156.

En efecto, aquella instancia puede iniciarse de oficio o por la "denuncia realizada por cualquier persona física o jurídica, pública o privada", razón por la cual nada impide que la autoridad administrativa de aplicación y control y/o los demandantes de estos autos den inicio a aquel procedimiento si estiman que la puesta en práctica del compromiso aprobado por la resolución atacada, constituye un acuerdo o práctica prohibida en el marco de aquella ley 25.156 o generadora de una distorsión inadecuada puntual o general del funcionamiento de la competencia en el mercado argentino de las telecomunicaciones.

Nótese que, en el marco de aquel procedimiento, se regula la pertinente sustanciación de la denuncia o del impulso de oficio, con intervención de los interesados, la cual constituye el contexto adecuado para el planteo y la profundización del análisis de actos que —según se expresa en las demandas— serían violatorios de la ley 25.156, máxime si aquel debate podrá ampliarse en el marco de la audiencia pública que, como opción, puede producirse durante el procedimiento administrativo, conforme surge del art. 38 de aquella

ley. Por supuesto que ello requeriría que los demandantes denuncien hechos concretos y no bastará con que se formulen meras conjeturas y disquisiciones teóricas como las que se han formulado por las demandas.

Por otra parte, por aquellos mismos artículos se regula una instancia de ofrecimiento y producción de prueba en el contexto de una instrucción sumarial, la cual es el ámbito adecuado para el desarrollo del déficit probatorio demostrado por la presente resolución, con relación a la incidencia en el mercado de la operación comercial cuestionada, analizada junto al compromiso aprobado por la resolución atacada.

Además, la sustanciación de aquel sumario no necesariamente ha de generar un retraso improcedente que pudiera perjudicar el adecuado funcionamiento del mercado en juego, pues, por el art. 35 de la ley 25.156, se establece que el cese o la abstención de la situación lesiva o la implementación de condiciones que eviten aquella lesión, podrá disponerse "...en cualquier estado del procedimiento...", esto es, aún antes del dictado de la sentencia administrativa que ponga fin al proceso.

Finalmente, aquel procedimiento también garantiza la revisión judicial suficiente de la decisión final que se adopte y, aún, de las medidas precautorias que se tomen en el contexto del art. 35 ya citado de la ley 25.156, toda vez que, por los arts. 35 y 52 de aquella ley se establece una instancia recursiva judicial contra aquellas decisiones de la sede administrativa.

73º) Que, en aquel contexto, vale aclarar que, por el dictamen 835/10, en tanto antecedente incluido en la resolución N° 148/10 (ver fs. 11455/11475 del Expte. 741 que, en copia, obra reservado por secretaría), la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, dejó bien en claro que el procedimiento que derivó en el dictado de la resolución atacada no es aquel al cual este juzgado aludió por el considerando anterior, pues aquella comisión hizo especial hincapié en que el procedimiento utilizado para el dictado de

[Firma]
GUSTAVO ROCCAS

RAFAEL CARUTO
JUEZ

SANDRA VIVIANA GONZÁLEZ
SECRETARIA

la resolución 148/10 es el procedimiento de análisis correspondiente al control previo relativo a existencia de supuestos de concentración económica aprobables o no, regulado por los arts. 6 a 16 de la ley 25.156.

En aquel marco, aquella comisión se encargó de diferenciar claramente que aquel procedimiento de control previo relativo a la existencia de concentración económica es sustancialmente diferente al procedimiento regulado a partir del art. 26 de la ley 25.156, el cual constituye un procedimiento *ex post* tendiente a interrumpir o sancionar conductas anticompetitivas concretas.

En este marco, la comisión fue clara en indicar que este último procedimiento no se llevó a cabo al dictar la resolución atacada, razón por la cual, se ratifica la idea de que aquel proceso está pendiente en el caso y es el adecuado para la producción amplia de los debates y las pruebas, conforme también lo señaló expresamente aquella comisión.

74°) Que, la alternativa aludida por los considerandos anteriores demuestra que el presunto derecho que las partes accionantes invocan podría contar con otro remedio administrativo-judicial adecuado a los fines de obtener su protección. Es que lo expuesto por la demanda, por sí, no demuestra que la resolución impugnada sea nula o ilegítima, pero ello no obsta a que la parte actora, de así estimarlo, acuda por la vía aludida.

Aquella alternativa es una razón más para el rechazo del amparo intentado, conforme a lo previsto por el inc. a) del art. 2° de la ley 16.986 y a lo sostenido por reiterada jurisprudencia sobre el tema.

Así, se advierte que, por el mencionado inc. a) del art. 2° de la ley 16.986 se establece que el amparo no será procedente cuando **"...Existan recursos o remedios judiciales o administrativos que permitan obtener la protección del derecho o garantía constitucional de que se trate..."** (el resaltado es de la presente).

En este sentido, la Sala "A" de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico expresó: "...La acción de amparo intentada por el accionante no es admisible **en tanto existía otra vía que resulta apta y específica para resguardar los derechos que podía estimar que le asistían**" (conf. Reg. N° 874/03 –el resaltado es de la presente-).

75º) Que, por la lectura de las presentaciones que dieron origen a la presente causa, no se indicó que aquel procedimiento regulado por los arts. 26 y siguientes de la ley 25.156 haya sido desarrollado por las partes actoras ante la autoridad administrativa pertinente, por lo menos con posterioridad al dictado de la resolución N° 148/10 cuestionada.

Si bien a fs. 307/308, una de las partes accionantes indicó que "AMX" habría efectuado una denuncia contra TELEFÓNICA S.A. con relación a la presunta verificación de conductas anticompetitivas, por la lectura del acápite pertinente de la presentación (IV 5 -fs. 307-), se advierte que aquella denuncia habría quedado enmarcada en el procedimiento llevado a cabo en el marco de la "... DP 29..." en la cual se tramitó el proceso de control previo de concentraciones y no el mencionado por el párrafo anterior regulado por los arts. 26 y siguientes de la ley 25.156.

De cualquier forma, aún cuando se entienda que aquel procedimiento de naturaleza administrativa previsto por los arts. 26 y siguientes haya sido iniciado, por aquella circunstancia no se impide el rechazo de esta acción de amparo, toda vez que, si alguna instancia de discusión faltare en aquel procedimiento (para el caso en el cual aquél haya tenido comienzo), aquella instancia faltante continúa siendo la adecuada para el desarrollo de la presente discusión. Finalmente, si aquel procedimiento fue iniciado y resuelto en absolutamente todas las instancias posibles, la cosa juzgada pertinente también sería un impedimento para dictar alguna resolución por la presente que pueda contradecir aquella decisión definitiva relativa al caso.

USO OFICIAL

[Firma]
OSCAR BOCAS

RAFAEL CAPUTO
JUEZ

SANDRA VIVIANA BONI
SECRETARIA

76°) Que, si bien por la resolución de la Sala "A" de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico obrante a fs. 167/167 vta. de estos autos principales, por la cual se dio a la presentación de fs. 1 ter/50 el trámite de una acción de amparo, se indicó que la ley 25156 no contempla un remedio apropiado para el reclamo intentado por aquella presentación, este juzgado entiende, respetuosamente, que la decisión que se tomará por la presente, sustentada parcialmente en la existencia de una vía de reclamo ordinaria para el caso, no resulta contradictoria con aquella decisión del Superior.

En efecto, no sólo se trata de que aquella decisión de la Sala "A" no tuvo por objeto el análisis acerca de si están o no están dadas en el *sub examine* todas y cada una de las condiciones para que se deba hacer lugar a lo que se entendió como una acción de amparo, toda vez que, además, aquella Sala indicó que por la ley 25.156 no se contempla un "...remedio **judicial** apropiado para..." "...la demanda [judicial, consecuentemente] *interpuesta para invalidar una resolución dictada por autoridades del gobierno nacional...*" (el resaltado es de la presente). En este marco, si se atiende a que la presentación de fs. 1 ter/50 se efectuó en sede judicial y no en sede administrativa, la resolución del Superior tuvo en cuenta, entiende respetuosamente este juzgado, aquella elección del demandante y, como consecuencia de aquella elección, indicó que, en el ámbito de la actuación judicial (no administrativa) intentada, no había otra instancia adecuada.

De esta forma, la sugerencia de la existencia de una alternativa administrativa (más allá de la revisión judicial prevista como instancia recursiva) efectuada por esta decisión no es contradictoria con la, sin dudas adecuada, manifestación del Superior mencionada por este considerando.

77°) Que, por la lectura de la presentación que dio inicio a esta causa, se advierte que TELECOM ITALIA S.P.A. habría

incrementado su participación originaria en SOFORA TELECOMUNICACIONES S.A. pues había adquirido del "GRUPO WERTHEIN" un 8% más de las acciones de SOFORA TELECOMUNICACIONES S.A., con lo cual aquella participación de TELECOM ITALIA S.P.A. en SOFORA TELECOMUNICACIONES S.A. ya no sería del 50%, sino del 58%.

Por otra parte, por ejemplo a fs. 137/140, el apoderado de una de las demandantes hizo saber, como un hecho nuevo, que *"...Con posterioridad a la interposición de la demanda, TELECOM ITALIA adquirió del denominado GRUPO WERTHEIN un 10% adicional de las acciones de SOFORA, controlante indirecto de TELECOM ARGENTINA..."*.

78º) Que la situación mencionada por el primer párrafo del considerando anterior, en rigor, no es novedosa, por cuanto fue objeto de tratamiento y resolución mediante el Dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia N° 836/2010 y la Resolución de la Secretaría de Política Económica N° 149/2010 (http://www2.mecon.gov.ar/cndc/archivos_c/836.pdf), ambos de la misma fecha que -respectivamente- el Dictamen N° 835/2010 y la Resolución N° 148/2010, que fueron cuestionados por las demandas. Aquella resolución N° 149/201 no ha sido objeto de cuestionamiento en este expediente.

En cambio, no surge de la demanda, ni de información pública de conocimiento de este juzgado que el hecho nuevo reseñado por el segundo párrafo del considerando anterior, haya sido tenido en consideración al dictarse la resolución N° 148/10, que es objeto de esta decisión. La parte actora, al ampliar la demanda con relación a la compra de un 10% adicional de las acciones de SOFORA TELECOMUNICACIONES S.A. solicitó se condene a TELECOM ITALIA S.P.A. y/o TELECOM ITALIA INTERNATIONAL N.V. a desinvertir y/o vender el referido 10% adicional.

En consecuencia, a los fines de actuar lo que pueda resultar menester, con relación a aquel nuevo estado de cosas y lo

[Firma]
Cecilia Rocas

USO OFICIAL

RAFAEL CAPUTO
JEFZ

SANDRA VIVIANA GONZALEZ
SECRETARIA

peticionado en las demandas al respecto, corresponderá solicitar a la Secretaría de Política Económica y a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que informen si tienen conocimiento de la adquisición del 10% de las acciones de SOFORA TELECOMUNICACIONES S.A. por parte de TELECOM ITALIA S.P.A y, en su caso, qué trámite se dio a la cuestión y qué decisión/es se tomó o se tomaron al respecto.

79°) Que, vale recalcarlo, el contexto de aquellas eventuales decisiones que se hayan tomado o se tomen por aquellos organismos administrativos, podrá ser una alternativa procesal más para que las partes demandantes en este complejo de causas administrativas y judiciales puedan hacer valer sus derechos (confr. arts. 13, perteneciente al Capítulo III, en función del art. 52 inc. c), y arts. 26 y ccs., todos de la ley 25.156), razón por la cual el derrotero final que pudiera tener el pedido que se efectuará según lo indicado por el considerando anterior, es otro motivo más para el rechazo de la presente acción de amparo, en tanto aquel derrotero final, implica la existencia de otros **"...recursos o remedios judiciales o administrativos que permitan obtener la protección del derecho o garantía constitucional de que se trate..."**, en tanto causal de improcedencia de la acción de amparo.

80°) Que, en otro orden de ideas, corresponde destacar que debe rechazarse el planteo efectuado por la actora a fs. 192/193 de estos autos principales, toda vez que no es posible entender que, por la compra del 10% de las acciones de SOFORA TELECOMUNICACIONES S.A. efectuada por TELECOM ITALIA S.P.A., se verifique, sin más y sin otra discusión posible, un incumplimiento del compromiso aprobado por la resolución atacada.

En efecto, no sólo se trata de que, por el propio compromiso se contempló la posibilidad de aquellas modificaciones (pues se contempló la obligación de informarlas a la Comisión

Nacional de Defensa de la Competencia [ver punto 2.10 del compromiso aceptado por la resolución 148/10 -ver fs. 11773 del Expte. 741, reservado -en copia- por secretaría-]], sino que, además, la estructura central de aquel compromiso no se sustentó en las participaciones accionarias solamente, sino, principalmente, en la forma de la toma de decisiones en el seno de las sociedades involucradas, en la forma de actuación de las personas físicas con cargos directivos en aquéllas y en el manejo de la información sensible, aspectos estos últimos, sobre cuyo incumplimiento o fracaso no se expidió en forma alguna la parte por la presentación mencionada de fs. 192/193.

Por otra parte, conforme fue indicado por los considerandos 77° y 78° de la presente, la autoridad administrativa deberá indicar lo que se actuó con relación a aquella operación de compraventa de acciones, a los fines que, eventualmente, resulten adecuados, como vía alternativa a este amparo de resguardo de los derechos de los accionantes motivadores de esta causa.

81°) Que, no corresponde hacer lugar a los traslados a todas las partes demandadas propuestos por la actora a fs. 137/140, 192/193 y 225. En efecto, aquella sustanciación no está prevista por las disposiciones legales por las cuales se regula la acción de amparo (ley 16.986) y no hay agravio al derecho de defensa de aquellas partes demandadas pues, conforme fue indicado a lo largo de esta decisión, la mayor discusión que aquellos traslados implican, deberá ser objeto de la vía administrativa alternativa de esta acción de amparo, regulada por los arts. 26 y siguientes de la ley 25.156.

82°) Que, si se tiene en consideración que, por la presente resolución se rechazará la acción de amparo que la Sala "A" de la Cámara Nacional de Apelaciones entendió interpuesta en estos autos, resulta abstracto el tratamiento de los diferentes argumentos por los cuales, en los términos del art. 8 de la ley 16.986, la representación

[Firma]
Gustavo Rocca

RAFAEL CARUTO
JUEZ

SANDRA YVIANA GONI
SECRETARIA

del Estado Nacional, a fs. 228/275 y 491/533, solicitó que se tome aquella decisión repulsiva de las acciones de amparo en estudio.

83°) Que, tampoco debe tomarse decisión en particular alguna, a partir de lo expresado por una de las partes actoras a fs. 490/490 vta. En efecto, la expresiones mencionadas por aquel escrito y atribuidas al Señor Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, no fueron vertidas por aquel funcionario en el marco de alguna actuación administrativa en particular, razón por la cual no pueden entenderse como la expresión oficial del Estado Nacional sobre la adquisición del 10% adicional de las acciones de SOFORA TELECOMUNICACIONES S.A. por parte de TELECOM ITALIA S.P.A.; máxime si aquel funcionario no es la autoridad de aplicación sobre el tema.

Por otra parte, por las propias expresiones transcritas a fs. 490 *in fine* y atribuidas a aquel ministro, se indicó que la cuestión vinculada con la compra adicional en estudio, estaba, precisamente bajo análisis. De esta forma, las conclusiones de aquel análisis podrán, de haber sido emitidas, ser informadas a este juzgado en el marco de lo indicado por el considerando 78° de la presente, a los fines de actuar -se reitera- lo que sea menester al respecto.

84°) Que, a fs. 190, con fecha 3 de julio de 2012, se ordenó a la representación del Estado Nacional que, en el plazo de diez días hábiles dé cumplimiento, entre otras cosas, con la presentación del informe del art. 8 de la ley 16.986 (ver remisión al decreto de fs. 171 efectuada a fs. 190).

El oficio por el cual fue efectuada la solicitud mencionada por el párrafo anterior fue recibido en destino el día 4 de julio de 2012 (ver recibo agregado a fs. 534). En consecuencia, aquel plazo de diez días hábiles vencía el día 2 de agosto de 2012.

En aquel marco, a fs. 213, se concedió, con fecha 13 de julio de 2012, una prórroga, también por diez días, para la presentación de aquel informe.

De esta forma, si el plazo originario vencía el día 2 de agosto de 2012, debe entenderse que, con una prórroga de nuevos diez días, el vencimiento operó el 16 de agosto de 2012, fecha a la cual ya había sido presentado, el día 15 de agosto de 2012 (fs. 228/275), el informe en cuestión.

Se advierte, en consecuencia, que el informe fue presentado en los plazos establecidos por este juzgado. No puede entenderse que la prórroga de un plazo previamente otorgado deba contarse desde una fecha diferente de aquélla en la cual vencía el plazo prorrogado, pues, de contarse la prórroga desde cualquier otro momento, se estaría en presencia no ya de una prórroga de un plazo ya otorgado, sino de un nuevo plazo, situación que no se verifica en este caso, pues, expresamente, a fs. 213, se hizo referencia a que se concedía una prórroga del plazo anterior ante el expreso pedido de la representación del Estado Nacional en aquel sentido efectuado a fs. 199/202 vta.

85º) Que, aún cuando se considere que la contestación del informe del art. 8 de la ley 16.986 fue presentada fuera de término, lo cierto es que, de cualquier forma, por la lectura de aquella ley, se advierte que no se prevé ninguna consecuencia específica ante aquella eventual presentación extemporánea, pues solo se indica que la omisión del pedido del informe puede acarrear la nulidad del proceso (ver art. 8 de la ley 16.986). Así, si ni siquiera tiene efectos nulificantes o interruptivos del proceso la no presentación del informe en cuestión, menos puede tenerlos una presunta presentación tardía.

Además, si se tiene en consideración que este juzgado tiene competencia penal, la aplicación subsidiaria (art. 17 de la ley 16.986) de las normas procesales en vigor en la materia civil y comercial resulta, por lo menos, cuestionable, razón por la cual es dudosa la posibilidad de aplicar el art. 155 del C.P.C y C.N., como para estimar que el plazo de presentación del informe del art. 8 debe estimarse perentorio.

[Firma]
Cecilia Rocca

USO OFICIAL

RAFAEL CAPUTO
JUEZ

SANDRA VIVIANA GONZALEZ
SECRETARIA

En aquel marco de dudas, corresponde la aplicación de la doctrina por la cual se considera que la interpretación de las disposiciones sobre invalidez de los actos deben interpretarse en forma restrictiva de manera tal de tender al mantenimiento de los actos del proceso como válidamente efectuados.

En este sentido, la Sala "B" de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico ha sostenido: *"...el postulado rector en lo que hace al sistema de nulidades es el de la **conservación de los actos**. La **interpretación** de la existencia de aquéllas es **restrictiva** (conf. art. 2 C.P.P.N.) y sólo procede la declaración cuando por la violación de las formalidades resulta un perjuicio real, actual y concreto para la parte, y no cuando aquéllas se vinculan con el único interés de la ley o para satisfacer formalidades desprovistas de aquel efecto perjudicial (conf. Regs. Nos. 367/00, 671/00, 682/00, entre muchos otros)... (conf. Reg. N°932/03, de la Sala "B" —el resaltado es de la presente—).*

86°) Que, como consecuencia de lo expresado por los considerandos 84° y 85° de la presente, no corresponde hacer lugar a la reposición intentada a fs. 278/279, por la cual se pretendió cuestionar la agregación a estos autos del informe del art. 8 presentado por la representación del Estado Nacional a fs. 228/275.

87°) Que, tampoco resulta procedente hacer lugar al recurso de apelación interpuesto en subsidio de aquel de reposición mencionado por el considerando anterior.

En efecto, resulta clara la enumeración taxativa de las resoluciones apelables efectuadas por la ley 16.986, toda vez que, por el art. 15 de aquella ley se indica que *"...sólo serán apelables..."* las decisiones que se mencionan por aquel artículo, entre las cuales no se encuentra la relativa a la aceptación de la presentación del informe del art. 8 de la ley de amparo.

De todas formas, nada impide que la parte recurrente trate el tema objeto de este considerando por el recurso que podrá

C: 2497/11
3: 5



Poder Judicial de la Nación

interponer, de estimarlo adecuado, contra la presente decisión. En este marco, no hay agravio irreparable en tanto requisito esencial del recurso de apelación.

Por todo lo expresado;

SE RESUELVE:

I) **NO HACER LUGAR** al recurso de reposición planteado a fs. 278/279. ✓

II) **NO HACER LUGAR** al recurso de apelación en subsidio interpuesto a fs. 278/279. ✓

III) **NO HACER LUGAR** a los traslados solicitados a fs. 137/140, 192/193 y 225. ✓

IV) **NO HACER LUGAR** a las presentaciones de fs. 1 ter/50 y 282/351 que, por lo expresado por la Sala "A" de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico a fs. 167/167 vta. deben entenderse como acciones de amparo (arts. 2 incs. a) y d) y 8 de la ley 16.986).


V) **CON COSTAS** (art. 14 de la ley 16.986).

VI) **REQUERIR**, por oficios, informes a la Secretaría de Política Económica y a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, en los términos del considerando 78º de la presente.

Regístrese y notifíquese.


RAFAEL CAPUTO
JUEZ


SANDRA VIVIANA GONI
SECRETARIA


CECILIA ROCCA

USO OFICIAL